CONTRATOS DE ALQUILERES

ADMINISTRACION GONZALEZ VIQUEZ

Nº 1.—Fabio Baudrit González, Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio, debidamente autorizado por el señor Presidente de la República, por una parte y José Aguilar Bolaños, mayor, casado, agricultor y vecino de Santo Domingo de Heredia, por la otra, han convenido en lo siguiente:

I

El señor Bolaños Aguilar da en arrendamiento al Gobierno por el término de un año prorrogable a otro año, más á juicio del inquilino y por el precio de treinta colones (₡ 30.00), de alquiler mensual, una casa constante de dos departamentos, situada en la ciudad de Santo Domingo de Heredia, inscrita en el partido de dicha provincia, tomo ochenta y dos, folio cuatrocientos cuarenta. El Gobierno ocupará esa casa para alojar las oficinas de la Alcaldía de la referida ciudad, u otras que el mismo estime conveniente.

II

El pago de alquiler estipulado se hará por mensualidades vencidas; y el Gobierno se obliga a devolver la casa, a la terminación de este contrato, en el mismo estado en que la recibe, salvo el deterioro natural del tiempo y del uso.

III

Las reparaciones que la casa requiera para su conservación serán por cuenta del propietario.

En fe de lo expuesto firmamos en San José, a los ocho días del mes de enero de mil novecientos treinta y dos.

Fabio Baudrit

José Aguilar B.

San José, 8 de enero de mil novecientos treinta y dos.

Apruébase el contrato que antecede.—GONZÁLEZ VIQUEZ.—El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio,—BAUDRIT.

Nº 2.—Entre los suscritos, Fabio Baudrit González, Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio, autorizado por el señor Presidente de la República y Miguel Pastor Bermejo, mayor, casado, comerciante y vecino de esta ciudad, se conviene:

I

Pastor tiene en arriendo y ocupada para casa de comercio una sección de la casa llamada de la Moneda, frente a la Estación del Ferrocarril al Atlántico en esta ciudad.

Su contrato, que es la última prórroga por dos años, va a vencer el día último de junio próximo entrante y aunque aparece a razón de doscientos setenta y cinco colones por mes, el hecho es que por convenio con el ex-Secretario

Soley Güell, sólo ha venido pagando ₡ 225.00 en atención a la notoria baja de los alquileres comerciales y al malestar de los negocios que ha venido acentuándose.

II

Estos mismos factores opone el señor Pastor para obtener nueva rebaja y además el hecho de que por haber sido suprimido el ramal de tranvía eléctrico frente a su establecimiento, donde formaba un punto terminal frecuentado por los pasajeros del Ferrocarril, sus negocios han venido muy a menos.

III

Considerándolos pertinentes y equitativos, a lo que se agrega que el señor Pastor viene establecido en el mismo sitio hace catorce años, durante los cuales ha cubierto los alquileres con toda regularidad, el Gobierno accede a que continúe de inquilino en las mismas condiciones de los contratos vencidos hasta por el término de dos años a partir del primero de mayo venidero, debiendo pagar de ahí en adelante, sólo ciento cincuenta colones (₡ 150,00), por mes; pero es bien entendido que el convenio está sujeto a vencimiento eventual, sin responsabilidad alguna para el Estado, a opción de éste, dando aviso por escrito con dos meses de antelación al inquilino y que en ningún caso se podrá hacerle cargo al Gobierno por daños que llegare a ocasionar el mal estado del edificio o su destrucción parcial o completa, cualquiera que fuera la causa de donde provenga; así como tampoco responderá por perjuicios originados por revueltas políticas y desórdenes y motines. También se reserva el derecho el Estado de promover la resolución del arriendo cuando se le ofreciere una suma mensual superior en cincuenta colones al menos a la renta ahora disminuida; pero se entiende que Pastor gozará de preferencia al mejorante, si acepta iguales condiciones y lo manifiesta por escrito en el plazo de un mes a contar del día en que se le den a conocer.

En fe de lo expuesto firmamos en la ciudad de San José, a los treinta días del mes de abril de mil novecientos treinta y dos.

Miguel Pastor B.

Fabio Baudrit

San José, treinta de abril de mil novecientos treinta y dos.

Apruébase el contrato que antecede.—GONZÁLEZ VÍQUEZ.—El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio,—BAUDRIT.

Nº 3.—Fabio Baudrit González, Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio, debidamente autorizado por el señor Presidente de la República; Federico Rohrmoser Lahmann, mayor, casado, agricultor, y de este domicilio, y Andrés Boza Cano, mayor, casado, comerciante, y vecino de aquí; el segundo como apoderado generalísimo de la Sociedad Rohrmoser Hermanos, de esta plaza, y el tercero como Presidente de la Junta de Educación de San José, debidamente autorizado por esa Corporación, según acuerdo único de la sesión de nueve de febrero último, han convenido en celebrar el siguiente contrato:

I

Los señores Rohrmoser Hermanos han dado en arrendamiento a la Junta de Educación dicha, por un término de dos años a contar del primero de marzo último, la propiedad situada en la calle tercera Norte, entre las avenidas Fernández Güell y primera Este, inscrita en el Registro Público, bajo el número tres mil, tomo veintiocho, folio ciento treinta y siete, asiento dos.

II

El precio del arrendamiento es la suma de seiscientos colones al mes, que pagará el Gobierno de la República por mensualidades vencidas, según compromiso contraído directamente por la Secretaría de Hacienda.

III

La Junta no podrá ceder el presente contrato ni destinar la propiedad a otro objeto distinto del de escuela para niñas, ni hacerle modificaciones, a menos que previamente obtenga el consentimiento escrito de la sociedad arrendante para cualquiera de estos actos o hechos, y si mediante tal asentimiento hiciere mejoras, éstas quedarán al finalizar el contrato, en beneficio de la propiedad, sin que en ningún caso ni por ningún motivo tenga la sociedad arrendante que pagar por ellos.

IV

En caso de venta de la propiedad, el presente contrato se considerará terminado de hecho, sin lugar a reclamo por parte de la arrendataria, quien se reserva el derecho de preferencia para la compra del inmueble en igualdad de condiciones, y deberá usar ese derecho dentro de los treinta días siguientes al aviso escrito que la sociedad propietaria le dirija. Pero es entendido que en el caso de que la Junta no usare de tal opción o preferencia, y la casa fuere vendida a un tercero, los arrendantes quedan obligados a obtener del comprador que respete este contrato, a fin de que continúe vigente en las mismas condiciones, hasta la terminación del curso escolar respectivo; y si la venta se celebrase durante los meses de diciembre, enero, o febrero, hasta dos meses después del aviso que por escrito se dé a la Junta.

V

La Junta se compromete a mantener y devolver el inmueble arrendado en el mismo buen estado en que lo ha recibido, salvo los deterioros naturales por razón del tiempo o los daños provenientes de fuerza mayor.

En fe de lo expuesto, firmamos en la ciudad de San José, a los seis días del mes de mayo de mil novecientos treinta y dos.

Fabio Badurit

F. G. Rohmoser

Andrés Boza Cano

San José, seis de mayo de mil novecientos treinta y dos.

Apruébase el contrato que antecede.—GONZÁLEZ VÍQUEZ.—El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio,—BAURIT.

ADMINISTRACION JIMENEZ OREAMUNO

Nº 1.—Carlos Brenes Ortiz, Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio, debidamente autorizado por el señor Presidente de la República, por una parte, y José Aguilar Bolaños, mayor, casado, agricultor y vecino de Santo Domingo de la provincia de Heredia, por la otra, han convenido en prorrogar por cuatro años más a contar de esta fecha, el arrendamiento de la propiedad descrita y debidamente inscrita en el Registro Público, a que se refiere el contrato Nº I, visible al folio ciento veinticuatro de este mismo libro, por el precio y demás condiciones allí estipuladas.

En fe de lo expuesto firmamos todos en la ciudad de San José, a las diez y media horas del diez y nueve de agosto de mil novecientos treinta y dos.

Carlos Brenes

José Aguilar B.

San José, diez y nueve de agosto de mil novecientos treinta y dos.

Apruébase el contrato que antecede.—JIMÉNEZ.—El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio,—BRENES.

Nº 2.—Carlos Brenes Ortiz, Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio, por una parte, y por otra doña Sara Chacón Paut de Facio, mayor de edad, casada, de ocupaciones domésticas, y de este vecindario, convienen en lo siguiente:

I

La señora Chacón de Facio dá en arrendamiento al Gobierno, para alojar la Dirección General de Estadística o para otros servicios públicos, su finca situada en el centro de esta ciudad, frente al Teatro Variedades, en la calle quinta Norte, entre las avenidas Fernández Güell y tercera Este, formada de los inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad, partido de esta provincia, en el tomo doscientos cincuenta y tres, folio quinientos setenta, bajo el número diez y siete mil quinientos noventa y ocho; tomo setecientos cuarenta y nueve, folio treinta, número diez y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho, y tomo novecientos ocho, folio cuatrocientos diez y nueve, número cincuenta y seis mil trescientos treinta y cinco, o sean, la casa de habitación ocupada actualmente por la Dirección General de Detectives, y los locales situados al Norte y al Sur de la misma casa, que habían sido excluidos del arrendamiento en el contrato número tres de primero de noviembre de mil novecientos veintiocho.

II

El plazo del arrendamiento será de cuatro años a partir del primero de enero en curso. El Gobierno se obliga a devolver el inmueble al finalizar el contrato en el mismo buen estado que actualmente se encuentra, salvo el deterioro proveniente del uso y trascurso del tiempo. Las reparaciones que sean necesarias para instalar la Dirección General de Estadística u otra oficina administrativa, las hará el Gobierno, por su cuenta.

III

El Gobierno recibe la casa, con los siguientes accesorios: instalación de alumbrado eléctrico para el zaguán de la entrada, hall, cuartos de habitación, corredores y dependencias interiores, con un total de catorce colgantes; instalación telefónica de la Compañía Nacional de Electricidad, con un aparato de pared que

pertenece a ésta, un lavatorio de porcelana de dos llaves; dos watter-closset bien instalados; el servicio de cañería que comprende siete llaves y dos aspersiones de baño, y el servicio de cloacas que asimismo se encuentra en buen estado.

IV

El Gobierno pagará como alquiler mensual la suma de seiscientos colones por mensualidades vencidas.

En fe de lo cual firmamos en la ciudad de San José, a diez de enero de mil novecientos treinta y tres.

Carlos Brenes

Sara Ch. de Facia

San José, diez de enero de mil novecientos treinta y tres.

Apruébase el anterior contrato,—JIMÉNEZ.—El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio,—BRENES.

Exposiciones y Proyectos de Ley

ADMINISTRACION GONZALEZ VIQUEZ

Nº 8894

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

Vuestro importante decreto Nº 51 ha sido objeto de un detenido estudio por parte del Poder Ejecutivo, y aunque en principio está de acuerdo con él, antes de ejecutarlo ha considerado necesario elevar a vuestra ilustrada consideración, modificaciones tendientes todas a facilitar su aplicación y a suavizar varias de sus disposiciones que encontraron fuerte y justificada oposición en algunas corrientes de la opinión pública.

Las modificaciones que os propone el Poder Ejecutivo fueron ampliamente tratadas con los distinguidos señores Diputados don Francisco de P. Gutiérrez y don Julio Padilla, miembros de vuestra Comisión especial de Hacienda. Ellos conocen en detalle las razones que ha tenido el Poder Ejecutivo para aconsejarlas, habiendo expresado su aceptación al señor Presidente de la República. Esa circunstancia me evita la tarea de fatigar la atención del Congreso con una larga exposición de motivos que resultaría innecesaria, por cuanto los señores Diputados mencionados se servirán sin duda dar las explicaciones que pudieran necesitarse.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo desea expresaros que aunque en repetidas ocasiones ha externado su criterio contrario a las emisiones, al aceptar la que ahora propone vuestro decreto, lo hace obligado por la apurada situación fiscal y por la gravedad de algunos aspectos de la vida económica de la nación y muy especialmente por cuanto la ejecución de toda la ley queda sujeta al juicio y prudencia de la Junta Directiva del Banco Internacional de Costa Rica que mercedamente cuenta con la confianza pública. Está seguro el Poder Ejecutivo que la emisión que se intenta decretar será manejada por la referida Institución Bancaria con tan extremada prudencia que las posibles alteraciones que llegara a sufrir el cambio internacional no revestirán mayor gravedad.

Por último, el Poder Ejecutivo aprovecha esta oportunidad para expresar al Congreso, que la situación fiscal, a pesar del oportuno auxilio que os servisteis decretar durante el pasado mes de diciembre, continúa extremadamente delicada.

En esta breve exposición no podría entrarse en detalles acerca de particular, pero el suscrito se complace en expresar a la Cámara que estará atento en cualquier instante con objeto de dar amplios informes al respecto, así como en lo tocante a las modificaciones a la ley de emisión y control de cambios, que muy respetuosamente y siguiendo instrucciones precisas del señor Presidente de la República, me permito someter a vuestra ilustrada consideración: todas están contenidas en el pliego adjunto que lleva la nueva redacción que aconseja el Poder Ejecutivo a vuestro decreto Nº 51 que, sin la sanción de ley, ha sido devuelto a ese Alto Cuerpo.

C. C.

FABIO BAUDRIT.

Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda.

San José, 6 de enero de 1932.

El Congreso etc.

Decreta:

Artículo 1º—El Banco Internacional de Costa Rica y el Crédito Hipotecario procederán a partir de la emisión de la presente ley, a cargar a la cuenta capital de cada uno de sus deudores por créditos hipotecarios, que lo solicite, todas las cuotas atrasadas que por intereses y amortización estén pendientes de pago a la fecha, sin entrar en el cargo las sumas provenientes de multas por mora, que quedarán de hecho canceladas. Podrán acogerse a tal beneficio los deudores contra quienes se hubiere establecido ejecución hipotecaria mientras no se hubiere aprobado el remate por auto firme. Se exceptúan únicamente aquellos créditos que por resolución unánime de las respectivas juntas directivas se consideren mal garantizados, en cuyo caso se procederá a pedir que se refuercen las garantías o a solicitar en caso de que no se dé tal aumento de garantía, el remate de la finca hipotecada.

Las escrituras que los deudores de los Bancos Internacional y Crédito Hipotecario hagan con relación a la presente ley, quedan exentas de impuesto de timbre, papel y derechos de registro; y en cuanto a las que haga con el fin dicho el Crédito Hipotecario no regirá lo prescrito en el artículo 22.

Artículo 2º—A solicitud de los deudores, dichos Bancos, previo examen del crédito procederán a extender el plazo de vencimiento por un año a efecto de que la cuota de amortización, también por un año, se deje por ahora de pagar y se reponga en el año de extensión que se conceda, o sea el último del plazo. Esas prórrogas se harán constar al pie del respectivo documento por medio de razón firmada por el Director del Banco que la concede.

Artículo 3º—Los Bancos referidos procederán a rebajar por un año, a partir de enero en curso, del 8 o el 9 al 6 % anual, el tipo de interés de los créditos hipotecarios a largo plazo.

Artículo 4º—El Banco Internacional continuará concediendo créditos a corto plazo, a juicio de la Directiva en cada caso, con el objeto de ayudar a los industriales y a los agricultores que se encuentren en dificultades para la debida recolección de sus cosechas. Esos créditos se concederán en las condiciones más ventajosas posibles y de acuerdo con lo que la referida Junta Directiva del Banco disponga.

Artículo 5º—Con el fin de reforzar su caja en la disminución de entradas que significa el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores y las otras disposiciones de esta ley, el Banco Internacional queda autorizado para aumentar su emisión en seis millones de colones, de cuyo aumento hará uso, dentro de las prescripciones de la ley, y a medida que lo vaya necesitando, a juicio de su Junta Directiva.

Artículo 6º—El Banco Internacional facilitará al Crédito Hipotecario las sumas que éste necesite para atender exclusivamente al servicio de intereses y amortización de sus bonos, a fin de que esa institución pueda dar cumplimiento, en lo que le corresponda, a las disposiciones de los artículos 1º, 2º y 3º. Este auxilio no podrá pasar de un millón quinientos mil colones, quedando a juicio de la Junta Directiva del Banco Internacional.

Artículo 7º—El Banco Internacional prestará al Gobierno:

a) Las sumas necesarias para completar el pago de los gastos de la Administración Pública especificados en el Presupuesto durante los meses de enero a abril, ambos inclusive del año en curso; dando preferencia al pago de sueldos, dietas y pensiones. Dichos préstamos se harán mediante depósitos que efectuará cada fin de mes el Banco Internacional en la Administración de Rentas en cantidad de ₡ 250,000.00;

b) ₡ 500,000.00 que distribuirá así: ₡ 242,000.00 para los fines que indica el artículo 9º de esta misma ley en cuanto a compras de panela y siempre que los

contratistas acepten esas condiciones; ₡ 258,000.00 para el pago de jornales atrasados y para el pago de sueldos, becas en el interior y pensiones atrasadas cuyos giros estén exclusivamente en poder de los girados.

Artículo 8º—El Banco Internacional destinará ₡ 500,000.00 para atender el servicio de Cajas Rurales de Crédito, y la fundación y sostenimiento de la Colonia Agrícola de Pococí de acuerdo con la ley respectiva. En cuanto al servicio de Cajas Rurales presentará al Poder Ejecutivo dentro de treinta días contados desde la promulgación de la presente ley, un proyecto de reglamento que allane las dificultades que el actual ha demostrado en la práctica.

Artículo 9º—También establecerá el Banco Internacional por su cuenta y bajo su administración en los lugares en donde lo creyere conveniente, Almacenes de Depósito para productos agrícolas e industriales del país, aplicando en cuanto sea adaptable la ley de 1916 sobre el mismo asunto.

Un año después de emitida esta ley deberán estar funcionando por lo menos los Almacenes necesarios para el fomento agrícola e industrial de la provincia de Guanacaste, debiendo seguir en orden los de Alajuela. Para tal objeto el Banco destinará ₡ 500,000.00.

Los ₡ 242,000.00 a que se refiere el párrafo b) del artículo 7º los pondrá el Banco Internacional a la orden del Ministerio de Hacienda con el fin exclusivo de pagar al contado y en cumplimiento de los respectivos contratos hasta un millón cien mil kilos de panela a los contratistas actuales proveedores de este artículo, que acepten la modificación de precio que aquí se establece. Lo aquí dispuesto sólo se aplicará a los contratos que no pasen de 50,000 kilos en total y en proporción a las cantidades de cada contrato.

Artículo 10.—Los préstamos que el Banco Internacional haga al Gobierno y al Crédito Hipotecario de acuerdo con las prescripciones de esta ley, devengarán un interés no mayor de cuatro por ciento anual, que necesariamente será capitalizado al final del primer año y cuyas demás condiciones fijarán de mutuo acuerdo las partes contratantes.

Artículo 11.—Todos los créditos existentes en esta fecha contra el Tesoro Público pagaderos en el país y que no consten en contrato que a ella se oponga serán cancelados a la par exclusivamente con Bonos Oro de la Deuda Pública, a cuatro colones por un dólar a cuyo objeto se destinan esos valores. Los créditos de esos acreedores del Estado que no quisieren recibirlos en cancelación de ellos, estarán sujetos a una moratoria de dos años.

Artículo 12.—A partir de la publicación de esta ley queda suspendida la autorización concedida al Poder Ejecutivo por el artículo 19 de la Ley de Presupuesto vigente y concordantes de la ley general sobre la materia.

Sin embargo, podrá entrar en arreglos con los Bancos del Estado y con el de Costa Rica para conseguir los fondos necesarios para cubrir los gastos autorizados por el Presupuesto, cuando las rentas no produjeran lo indispensable para ese objeto.

Artículo 13.—También a partir de la publicación de esta ley, los pagos por contribuciones directas e indirectas, tasas y servicios, deberán hacerse exclusivamente en dinero efectivo o si se tratare de impuestos que por ley deben pagarse en oro en letras sobre el extranjero debidamente garantizadas a juicio del Ministerio de Hacienda, quedando sujetos a nulidad los que se hagan en contravención de este artículo.

Artículo 14.—Establécese una Junta de Control de Cambios y Exportación de Productos, dependiente del Banco Internacional de Costa Rica, integrada por tres miembros de nombramiento de la Directiva de dicho Banco. La Junta tendrá por misión regular la exportación de oro y divisas extranjeras y controlar la exportación de los productos nacionales para mantener la estabilidad del cambio. Los

miembros de la Junta de Control no podrán formar parte de la dirección de ninguna institución de crédito ni del cuerpo de empleados de ella. Sus facultades y atribuciones son las siguientes:

a) Autorizar toda transacción referente a divisas internacionales haciendo constar su aprobación en el mismo documento mediante los arbitrios que la misma Junta designe, tales como sellos, timbres o cualesquiera otros, siempre que la transacción responda al movimiento regular y legítimo de las actividades económicas y financieras del país. Sin la autorización de la Junta será nulo todo documento de traspaso de divisas extranjeras;

b) Negar dicha autorización cuando a su juicio el traspaso real o simulado que pretenda hacerse de cualquier divisa extranjera no responda a necesidades justificadas del intercambio comercial o de obligaciones de familia o de gastos de educandos en el exterior u otras de igual índole, tomando siempre muy en cuenta su relación con las conveniencias generales del país;

c) Extender a los exportadores de productos nacionales o de otras mercancías permiso para la exportación, el cual sólo se concederá cuando a la Junta se le dé la seguridad de que el precio líquido obtenido en moneda extranjera por tal exportación se pondrá a la disposición de la Junta para que ésta autorice la venta. Los exportadores estarán obligados a declarar a la Junta las sumas por ellos recibidas como anticipo del precio de venta de sus productos dentro de los quince días siguientes a la promulgación de esta ley; los que no hicieren tal declaración dentro de ese término, se considerará como si no hubieren girado adelantos.

La Junta de Control de Cambios y Exportaciones tendrá un experto en cambios que actuará como consejero permanente de ella.

El Banco Internacional costeará los gastos que requiera el servicio de la Junta.

Artículo 15.—Únicamente los Bancos que se inscriban en el registro respectivo de la Junta de Control de Cambios pueden vender letras sobre el exterior al comercio y a los particulares, con la debida autorización de la Junta conforme se indica en el artículo anterior. Los exportadores de productos nacionales y cualquier persona que reciba una letra procedente del extranjero, por cualquier concepto, deberán necesariamente venderla a esos Bancos. Los contraventores de esta disposición sufrirán una multa equivalente a la mitad del documento vendido o un arresto de seis meses a un año.

Las personas morales o físicas están en la obligación, diez días después de publicada esta ley, de manifestar a la Junta las cantidades de oro y divisas extranjeras que tengan en el interior y los créditos y depósitos que tengan en el exterior; sea de su pertenencia, sea de pertenencia de depositantes u otros acreedores, de estos fondos tomará nota la Junta, para los fines del artículo siguiente.

Artículo 16.—Las personas físicas o morales antes dichas así como los acreedores de ellas por razón de depósitos, a que se refiere el artículo anterior, tendrán la obligación de vender con autorización de la Junta sus fondos en divisas extranjeras siempre que quieran girar letras o cheques sobre el exterior; pero no cuando los retiren o utilicen en moneda nacional al cambio oficial fijado por la Junta.

Artículo 17.—Los Bancos no podrán efectuar la venta de ninguna divisa extranjera a tipos más altos que los fijados por la Junta de Control de Cambios. La contravención a lo dispuesto en este artículo será penada con multa de mil y cinco mil colones la primera y segunda vez, respectivamente; a la tercera con multa de cinco mil colones y suspensión por un año de la facultad de vender y comprar letras. La Junta publicará diariamente en La Gaceta el tipo oficial de cambios. Será competente para conocer y juzgar de las faltas explicadas en este artículo y en el 15 el Gobernador de la provincia con apelación ante la Secretaría de Gobernación.

Artículo 18.—Las personas físicas o morales, residentes en el país, que

tuvieren deudas contraídas en monedas extranjeras con personas o entidades domiciliadas en el exterior, harán buen pago y se descargarán de esas obligaciones consignando a la orden de la Junta de Control de Cambios, en el Banco que ella designe, la equivalencia de esas deudas al tipo fijado por la Junta el día del vencimiento de la obligación.

La Junta, en el caso antes previsto, obtendrá a la mayor brevedad posible, la letra o giro correspondiente y hará el envío por cuenta del interesado al acreedor respectivo. Se exceptúan las obligaciones contraídas en monedas extranjeras para ser pagadas con productos y efectos exportables y los créditos contra el país por efectos importados.

Artículo 19.—Las deudas contraídas en moneda extranjera antes de la emisión de esta ley que deban cubrirse en el país, serán pagadas en moneda nacional en su equivalente al tipo oficial fijado por la Junta, en caso de que el deudor no haya podido obtener letras o giros sobre el exterior y así lo comprobare debidamente. Si el acreedor rehusare el pago, el deudor gozará de una moratoria de dos años sin interés.

Artículo 20.—Todas las disposiciones referentes a cambios se considerarán de orden público y de aplicación inmediata. El Banco Internacional procederá a integrar la Junta de Cambios a la mayor brevedad a fin de que ésta dicte su reglamento y entre en funciones dentro de los diez días naturales posteriores a la publicación de esta ley.

Artículo 21.—Las sucursales o agencias de Bancos extranjeros establecidas en el país estarán sujetas a todas las disposiciones de esta ley.

Artículo 22.—A partir de la publicación de esta ley y como medida de orden público, queda terminantemente prohibido emplear en las operaciones de crédito y en las transacciones comerciales o de cualquier otra índole que dentro del país se realicen, moneda distinta de la nacional, salvo que se trate de documentos o contratos referentes al comercio de importación o exportación o de operaciones del Banco Nacional de Seguros o de las que haga el Estado con el extranjero y el Registro Público y los de Prenda, negarán la inscripción de los documentos en que se consignen derechos y obligaciones a favor o en contra de personas físicas o morales domiciliadas en el país, en divisas extranjeras.

Las obligaciones en colones que se hubieren convertido a monedas extranjeras, dentro de los treinta días anteriores a la emisión de esta ley, no tendrán fuerza obligatoria en cuanto a la estipulación de nueva moneda.

Artículo 23.—Para disminuir la exportación de oro el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, a la mayor brevedad posible, convocándolo extraordinariamente si fuere preciso, un proyecto de ley que grave fuertemente la importación de artículos que se consideren de lujo y la de aquellos que se puedan producir en el país.

Artículo 24.—El Banco Internacional de Costa Rica irá respaldando o retirando de la circulación sus billetes en la cantidad que a juicio de la Junta Directiva sea necesaria a fin de mantener la estabilidad de la moneda en la relación que fija la ley que creó la Caja de Conversión.

Para la formación de ese fondo de reserva, o el retiro de billetes en su caso, se destinará, desde la promulgación de esta ley, el 50 % de las siguientes rentas:

1º—Impuesto sobre el consumo de cerveza creado por ley N° 23 de 23 de octubre de 1931.

2º—Impuesto sobre el consumo de cigarrillos creado por ley N° 24 de 20 de setiembre de 1931.

3º—Impuesto de conversión.

La Administración Principal de Rentas apartará diariamente el 50 % dicho y lo remitirá al Banco Internacional para la formación de un fondo acumulativo con intereses para el fin antes expresado.

Artículo 25.—Esta ley es de orden público y rige desde su publicación. La reglamentará el Poder Ejecutivo y deroga todas las leyes que se opongan a la presente.

Al Poder Ejecutivo
Dado etc.

FABIO BAUDRIT.
Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda

Nº 9008

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

La situación fiscal expuesta por mí cuando el día doce del mes se me llamó a informaros al respecto, no se solventa con la provisión que determina la ley que decretasteis ayer sobre emisiones y cambios, ni puede mantenerse en el mismo estado sin peligro para la normalidad del Gobierno; por lo mismo, como complemento de vuestros trabajos económicos concluidos, cree el Poder Ejecutivo que no os negaréis a pasar el siguiente proyecto que, con instrucciones del señor Presidente de la República, tengo el honor de someter a estudio de la Cámara:

El Congreso etc.

Decreta:

Artículo 1º—El Banco Internacional de Costa Rica, además de las sumas que debe entregar mensualmente al Gobierno de acuerdo con la ley Nº procederá a depositar en la Administración de Rentas la suma de un millón cien mil colones, con destino específico a pagar sueldos, dietas y pensiones durante los meses de enero a abril de este año, inclusive, y los gastos electorales del ejercicio en curso.

Artículo 2º—Durante el mes de enero depositará seiscientos mil colones; en febrero y en marzo doscientos cincuenta mil colones cada mes.

Artículo 3º—Suplirá este dinero con el fondo que está autorizado para Almacenes de Depósito de Productos Agrícolas e Industriales del país; y con el que debe destinar a Cajas Rurales de Crédito. El resto lo tomará del fondo de pequeños préstamos. El Estado queda obligado a intereses del 4 % anual y debe restituir el millón cien mil colones dentro de un año, con destino a esos propósitos de la Ley de Emisión, sin perjuicio de que el propio Banco Internacional acometa la ejecución de ellos entretanto, aplicando fondos suyos de los no creados expresamente por la misma ley.

Artículo 4º—Esta ley rige desde su publicación.

Al Poder Ejecutivo
Dado etc.

Presento a los señores Diputados el testimonio de mi alta consideración,

FABIO BAUDRIT.
Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda

San José, 14 de enero de 1932.

Nº 85

Señores Secretarios del Congreso Constitucional

S. D.

Por el digno medio de VV. tengo el honor de suplicar a esa Cámara que, sea muy servida de considerar ampliado el proyecto de ley que con fecha 14 de los

corrientes presentó esta Secretaría, solicitando que el Banco Internacional depositase en la Administración Principal de Rentas lo necesario para pagar sueldos, dietas y pensiones, durante los meses de enero a abril de este año, cuya ampliación ruego considerar en la siguiente forma:

Para pagar sueldos y servicios de la vía del Ferrocarril al Pacífico, en el mes de diciembre último	₡ 81635 80
Para iguales gastos correspondientes al mes de enero en curso	100000 00
	<hr/>
	₡ 181635 80

El señor Secretario de Estado en el Despacho de Fomento dará a la Cámara las explicaciones necesarias acerca de las causas que motivan la anterior petición.

Con las seguridades de mi consideración más distinguida, me reitero de VV. muy atento y seguro servidor,

Por Secretario de Hacienda, ELADIO MONGE E.
Subsecretario de Hacienda

(Gaceta N° 13 de 19 de enero de 1932).

N° 87

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

La Junta de Educación de San José ha dirigido al señor Presidente de la República la siguiente petición:

"N° 2550.—23 de diciembre de 1931.—Señor Presidente de la República, Licenciado don Cleto González Víquez.—S. D.—Señor Presidente: En las distintas conversaciones que hemos tenido acerca de las grandes obligaciones de las Juntas de Educación y escasas rentas para atenderlas, hemos llegado a la conclusión de que es de imperiosa necesidad crear a éstas, nuevas entradas que permitan hacerle frente decorosamente a las obligaciones que les fija la ley.

El magno problema que ha mantenido en actividad el pensamiento de la Junta, la construcción del edificio Juan Rafael Mora, ha obligado a esta corporación a hacer ante su Gobierno el último esfuerzo, que esperamos tenga acogida por parte de usted, a fin de que al abandonar los cargos con que nos ha distinguido al nombrarnos en esta Junta, podamos dejar rentas nuevas a las Juntas de Educación y al país una buena construcción escolar.

Con este motivo, tenemos el gusto de enviar a usted un estudio de lo que, a nuestro juicio, puede ser la base de un proyecto de impuesto de consumo sobre las bebidas alcohólicas a beneficio de las Juntas de Educación, satisfaciendo así los fines altruistas que se persiguen.

En todos los países, las bebidas alcohólicas sirven de preferencia para la explotación fiscal, sobre todo desde la post-guerra se nota una tendencia muy marcada para atraer la cerveza, el vino y los licores a una contribución mayor. La imposición tributaria puede establecerse en las tres formas siguientes:

- 1°—Por medio del Arancel de Aduanas;
- 2°—Por un impuesto sobre el consumo, y
- 3°—Por el monopolio parcial o total.

Costa Rica aplica las tres formas; últimamente, por ley N° 33 de 23 de octubre de 1931, se estableció el impuesto sobre el consumo de la cerveza de cualquier

procedencia, impuesto que ya existía para la cerveza nacional, a favor de una institución de beneficencia, desde el año de 1915.

Un impuesto sobre el consumo de los vinos y licores de tola clase, quedaría en nuestro concepto, plenamente justificado, por las razones siguientes:

1º—Los vinos y licores no pueden clasificarse entre las sustancias alimenticias de primera necesidad o de consumo general; entran, más bien, en el grupo de artículos de consumo superfluo.

2º—El legislador gravó últimamente, con un impuesto de consumo, la cerveza, dejando los vinos y licores fuera de esta contribución, sin justificativo alguno.

Los vinos y licores actualmente contribuyen tan sólo por medio del Arancel de Aduanas y su gravamen relativo, a pesar de que se cobra a base de peso bruto, no puede considerarse exagerado; muchos otros artículos de primera necesidad, de consumo general, tienen un gravamen más fuerte que las bebidas alcohólicas, que los vinos no espumantes, cuyo gravamen es pequeño relativamente. En cuanto a los licores, en casi todos los países vecinos, según se desprende de sus Aranceles, están más fuertemente castigados.

La importación de vinos y licores ha venido aumentando de año en año, hasta 1929 en que llegó a su máximum. El cuadro que viene a continuación indica en kilos este desarrollo, desde el año de 1924/30.

IMPORTACIÓN DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS DESDE EL AÑO 1924 HASTA EL AÑO 1930, SEGÚN CLASES Y SU PESO EN KILOS

Clase	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930
Vino blanco	65962	75097	89560	97544	88399	105665	51313
Vino tinto	191481	246084	264035	270579	253225	206326	122408
Vino generoso	173460	178363	173909	167019	181356	178985	96395
Vino Vermouth	86051	68481	87381	110665	62326	62772	16358
Vino de frutas	10817	14319	11172	18016	11586	15521	8285
Vino espumante	16489	18215	22126	26188	34496	35860	15900
Whiskey	54632	54076	60633	67296	83917	78494	45848
Cognac	16977	13542	19702	26157	34146	31741	17454
Demás licores	14862	14848	16687	19315	21449	24637	11892

Estos datos demuestran que la importación de vinos corrientes no adicionados, alcanzó en el año de 1927 un máximum de 535,142 kilogramos arrojando los vinos adicionados y de frutas la suma de 128,681 kilogramos. En 1929 la importación de vinos espumosos llegó hasta el término de 35,860 kilogramos; pero precisa llamar la atención que casi un 30 % de esta cantidad no tributa, está exenta de derechos por concesión de gracia a favor de los representantes extranjeros acreditados en el país. La importación de licores, mistelas, amargos, aguardientes etc., alcanzó su máximum en 1928 con 139,512 kilogramos.

En el año de 1930 se registra una disminución tan fuerte en el volumen de importación de bebidas alcohólicas que se pasa en mucho el de 1924, año en que se inició el auge de una intensa importación. Por tal motivo, el año de 1930 que hemos tomado de base para nuestros cálculos, da sin inflamiento de ninguna especie el mínimum a que puede llegar el monto del impuesto de que nos ocupamos.

Es un fenómeno general el que en épocas de crisis la importación de artículos superfluos disminuye rápidamente y a saltos y no paulatinamente como la de los artículos de primera necesidad y de consumo general; esta consecuencia a la inversa, es decir, la importación de los artículos superfluos, en tiempos de reajuste económico, aumenta, en cambio, en mayor proporción que la de los artículos de primera necesidad y de gran consumo.

Las distintas clases de vinos y licores que aparecen en el cuadro anterior, pueden resumirse en cuatro grupos, de lo que resulta un desarrollo de volumen de importación como sigue:

Clases	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930
Vinos corrientes	430903	499544	527504	535980	522980	490476	270116
Vinos adicionados y de frutas	96868	82800	98553	218681	73912	78293	24643
Vinos espumosos	16489	18215	22126	26188	34496	35860	16900
Licores y mistelas	84471	82022	112768	139512	139512	134872	75194

Corresponde a la justicia de la imposición tributaria del impuesto que se escale poco más o menos, sobre el valor del producto, por lo que aconsejamos se tome como base la clasificación del Arancel de Aduanas, distinguiéndolos, pues, en tres grupos generales:

- a) Vinos corrientes sin adición;
- b) Vinos adicionados, y
- c) Licores y vinos espumosos.

Este impuesto debe ser cobrado por unidad de medida y no por peso, es decir, por el volumen del líquido.

El siguiente cuadro demuestra, aproximadamente, la cantidad en litros, de las diversas clases de vinos y licores que se importaron en los años de 1924, 1929 y 1930.

**IMPORTACIÓN DE VINOS Y LICORES SEGÚN CLASES EN LOS AÑOS 1924, 1929 Y 1930,
EN LITROS**

Clase	1924 Litros	1929 Litros	1930 Litros
Vino blanco	40085	64211	31182
Vino tinto	116361	125383	74387
Vino generoso	86730	89493	48198
Vino Vermouth	43026	31386	8179
Vino de frutas	5408	7761	4143
Vino espumoso	6870	14491	7042
Whiskey	26015	37521	21847
Cognac	9986	18671	10267
Demás licores	7077	11732	5663
Cantidad comercial, 3,000 litros.			

Impuesto de consumo sobre los vinos y licores y su rendimiento probable. El volumen de importación del año de 1930, que constituye a nuestro juicio un minimum, puede servir de base para el cálculo del rendimiento probable de este impuesto.

No nos parece exagerado proponer, después de un estudio detenido del asunto, que el nuevo tributo pese por unidad de litro, en la forma siguiente:

- ¢ 0.30 para los vinos corrientes no adicionados.
- 0.60 para los vinos adicionados y los de frutas.
- 1.20 para los vinos espumosos, licores y mistelas.

Consecuencia fiscal	Año de 1930	Mínimum de producción
1º—Vinos corrientes	153,767 lts. a ¢ 0.30	¢ 46,130-00
2º—Vinos adicionados	12,322 " a 0.60	7,393-00
3º—Vinos esp. licores, etc.	40,777 " a 1.20	48,932-00
Total producto anual del impuesto		¢ 102,455-00

En cuanto al vino de frutas de producción nacional, con excepción del que procede de la Fábrica Nacional de Licores, proponemos que se grave con un impuesto de consumo de ¢ 0.15 por litro, que es muy modesto y que por justicia impositiva debe establecerse, ya que la cerveza y otros artículos de producción nacional han quedado afectados en igual forma por leyes recientes.

Puede calcularse la producción nacional de vinos en unos 50.000 litros que con el impuesto de ¢ 0.15 por litro que se indica, produciría alrededor de ¢ 7,500.00 anuales.

El total general del impuesto de consumo sobre los licores y los vinos alcanzaría, pues, a una cantidad no menor de ₡ 110,000.00 por año.

Consecuencias comerciales. El impuesto de consumo en la forma mencionada está tan prudentemente calculado, que no creemos pueda afectar seriamente el precio de venta de los productos gravados. Con la advertencia de que el impuesto se cobra según nuestro sistema por litro y no por botella, citamos aquí algunos ejemplos: un litro de vino Chianti que se vende acualmente a ₡ 4.50, con buen margen de ganancia para el vendedor, con el nuevo impuesto de ₡ 0.30 por litro se vendería a lo más a ₡ 4.80; un litro de whiskey, en lugar de ₡ 15.00, a ₡ 18.00, a ₡ 16.20 o a ₡ 19.20, por el aumento de ₡ 1.20 que representa el impuesto de consumo y una botella de cognac cuyo precio en plaza es de ₡ 15.00 a ₡ 18.00 término medio, se vendería a ₡ 15.80 o ₡ 18.80. Una botella de vino corriente sufriría una alteración en el precio de ₡ 0.20 y la botella de vino adicionado de ₡ 0.40. En cuanto a los vinos de frutas de fabricación nacional, el aumento de ₡ 0.10 por botella, no puede afectar el consumo en ningún caso.

Vale hacer la advertencia el hecho de que los licores y vinos espumosos pagaron el Impuesto de Recompensas, que estableció el decreto N° 16 de 13 de julio de 1920 y que refundido en el aforo, modificó el decreto N° 33 de 24 de diciembre de 1926, disminuyendo en buena proporción de gravamen aduanero.

Gastos de recaudación. El impuesto de consumo sobre los licores y vinos importados se cobrará en aduana y se liquidará en el pedimento de desalmacenaje en la misma forma que los otros impuestos, sin necesidad de timbre especial y por lo tanto sin ocasionar gastos ni molestia alguna al comerciante.

En cuanto al timbre para los vinos de frutas de fabricación nacional los gastos no son mayores: un simple marbete por el estilo del que se usa para la cerveza y que la Imprenta Nacional puede suministrar.

PROYECTO DE LEY

El Congreso Constitucional etc.

Considerando:

1°—Que es deber imperioso de las Juntas de Educación mantener convenientemente la parte material de las escuelas, que en la actualidad, por las escasas rentas de que disfrutan no pueden ofrecer los medios de trabajo a los maestros.

2°—Que la construcción de edificios y mobiliarios escolares es una de las mayores necesidades que deben llenarse para el desarrollo de la educación pública.

3°—Que la Junta de Educación de San José tiene urgencia de poner al servicio público la escuela Juan Rafael Mora que en forma estable va a perpetuar la memoria del Benemérito de la Patria don Juan Rafael Mora,

Decreta:

Artículo 1°—Se establece un impuesto que se llamará "Escolar" sobre la importación de los vinos y licores de toda clase comprendidos en la clasificación 8a. del Arancel de Aduanas, en la forma que a continuación se expresa:

₡ 0.30 por litro de vino corriente no adicionado.

0.60 por litro de vino adicionado y de frutas.

1.20 por litro de vino espumoso y de licores de toda clase.

Artículo 2°—Los vinos de frutas de fabricación nacional, que no procedan de la Fábrica Nacional de Licores, satisfarán el impuesto "Escolar" a razón de ₡ 0.15 por litro.

Artículo 3º—Este impuesto, en lo que se refiere al vino de producción nacional, estará representado por un timbre en forma de marbete que cubra la tapa del envase, de manera que al abrirse quede inutilizado.

Artículo 4º—El impuesto para los productos extranjeros se liquidará en Aduana, en renglón separado, en la póliza de desalmacenaje.

Artículo 5º—La Administración General de Rentas abonará diariamente, en cuenta separada, el producto de este nuevo impuesto y estará a la orden de las Juntas de Educación, quienes percibirán esta renta, llenando las mismas formalidades que rigen para las rentas de que disfrutaban actualmente.

Artículo 6º—Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, como medida de emergencia, gire de lo recaudado de este nuevo impuesto mensualmente, la suma que la Junta de Educación de San José de acuerdo con el contrato firmado, deba satisfacer para el pago del valor del edificio escolar Juan Rafael Mora. Es entendido que una vez pagado el valor de este edificio escolar, la renta producida por este impuesto pasa a engrosar las entradas de las Juntas de todo el país, proporcionalmente a su matrícula, en el último año de recaudación.

Artículo 7º—Esta ley rige desde la fecha de su publicación.

Dado, etc.

Abrigamos la esperanza como le dejamos expuesto al principio, que usted acogerá con simpatía este último esfuerzo de la Junta, para dejar definitivamente terminados los problemas imperiosos de las rentas de las Juntas de Educación y el magno e inaplazable problema de la terminación del edificio escolar Juan Rafael Mora.

Con toda consideración, somos del señor Presidente de la República muy atentos servidores, (f.) Andrés Boza Cano, Presidente de la Junta de Educación. (f.) J. Madriz M., Secretario de la Junta de Educación”.

Con instrucciones del señor Presidente de la República, y con ruego de que os sirváis darle buena acogida, me he permitido transcribir lo anterior a ese Alto Cuerpo.

C. C.

FABIO BAUDRIT

Secretario de Estado en el

Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 25 de enero de 1932.

ADMINISTRACION JIMENEZ OREAMUNO

Nº 2

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

La Secretaría de Gobernación ha tenido a bien dirigir a ésta el siguiente oficio:

“10619.—San José, 23 de mayo de 1932.—Señor Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda.—S. D.—Según la Ley de Presupuesto actual, artículo V, partida 3ª, Cartera de Gobernación, aparece asignado un sueldo de cien colones mensuales para el cargo de Gobernador de la provincia de San José. Es evidente que tal asignación no corresponde en ningún concepto. Cuando el proyecto se elaboró por el Poder Ejecutivo y se emitió la ley por el Congreso, las funciones de Gobernador estaban refundidas en las de Director Gral. de Policía, lo cual explica que se hubiera señalado un sueldo tan pequeño para retribuir las funciones recargadas. Ahora cada

uno de los puestos dichos está desempeñado individualmente, y se ve la necesidad de señalar dotación adecuada para el Gobernador. En consecuencia ruego a Ud. se digne presentar al Congreso un proyecto de ley tendiente a adicionar el presupuesto con trescientos colones mensuales a fin de dotar con cuatrocientos colones la plaza dicha. Me permito suplicar a Ud. la pronta atención de este asunto por la urgencia que implica para el efecto de los giros del mes en curso. Con distinguida consideración soy de Ud. atto. y S. S.,—SANTOS LEÓN HERRERA, Secretario de Estado”.

Por lo expuesto, y con autorización del señor Presidente de la República vengo a someter a vuestra alta consideración el siguiente proyecto de ley:

El Congreso, etc.

Decreta:

Artículo único.—Auméntase a cuatrocientos colones mensuales la dotación asignada en el presupuesto vigente al señor Gobernador de la provincia de San José.

Al Poder Ejecutivo
Dado etc.

C. C.

CARLOS BRENES
Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 24 de mayo de 1932.

Nº 6

CONGRESO CONSTITUCIONAL.

Algunas de las partidas del presupuesto vigente asignadas a diversas Secretarías son insuficientes para los gastos del año.

Con instrucciones del señor Presidente de la República, vengo a solicitaros que os sirváis aumentarlas en las cantidades que abajo se indican, calculadas para los siete meses que faltan, con base en lo fijado a las mismas en el Presupuesto de 1930, por tratarse de iguales servicios en uno y otro año.

Os propongo, para ese fin, el siguiente proyecto:

El Congreso etc.

Decreta:

Artículo 1º—Auméntanse las partidas de las Secretarías que a continuación se indican en la siguiente forma:

Cartera de Seguridad

(Partida 7)

Vestuario de tropa	₡ 17500 00
Medicinas para tropa	4700 00
Útiles de escritorio	2400 00
Eventuales del ejército	11700 00

(Partida 20)

Vestuario de policía	₡ 26250 00
Compra de gasolina, etc.	5900 00
Medicinas para policía	3000 00
Útiles de escritorio	1200 00
Eventuales de policía	8750 00

(Partida 30)

Vestuario de bandas	₡ 11700 00
Utiles de escritorio	600 00

(Partida 42)

Medicinas para reos	₡ 5900 00
Utiles para escritorio	1750 00
Eventuales cárceles	7000 00

(Partida 45)

Reparación de lanchas	₡ 4100 00
Utiles de escritorio	590 00

Cartera de Hacienda

(Partida 13)

Materiales	₡ 43750 00
----------------------	------------

(Partida 14)

Para aprehensiones	₡ 8750 00
Gastos diversos	20500 00

Artículo 2º—Este decreto rige desde su publicación.

Al Poder Ejecutivo

Dado etc.

C. C.

CARLOS BRENES

Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 14 de junio de 1932.

Nº 8

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

La Secretaria de Gobernación ha tenido a bien dirigir a este Despacho el oficio que dice:

“Nº 10889.—San José, 13 de junio de 1932.—Señor Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda.—S. D.—Conforme podrá Ud. constatarlo en la Ley de Presupuesto actual la Cartera de Gobernación ha carecido de fondos para enseres y artículos de escritorio; para elecciones fueron señalados sólo ₡ 20,000.00 y para eventuales ₡ 5,000.00. Las oficinas de esta Cartera ha sido preciso surtir las con cargo a eventuales; y esas oficinas son muchas; las recién pasadas elecciones consumieron en su totalidad los fondos presupuestos y no los hay para los gastos de las elecciones municipales próximas; la partida de eventuales está ya casi agotada. En la Cartera de Policía, los ₡ 70,000.00 para policía de villas y pueblos, los ₡ 6,000.00 para eventuales, los ₡ 4,500.00 para enseres y útiles de escritorio y los ₡ 4,000.00 para uniformes, armas, etc. etc., están no solamente gastados ya, sino que están pendientes de pago cuentas y servicios correspondientes a tales renglones. A fin en parte de cubrir lo que se adeuda, y en parte de hacer sin tropiezo los servicios en lo que falta del ejercicio económico actual, tengo el honor de dirigirme a la Secretaría de su digno cargo, con atenta súplica de que obtenga del Poder Legislativo una ampliación al Presupuesto así:

Cartera de Gobernación

(Artículo 5º. Partida 19)

Para enseres y útiles de escritorio	₡ 10000 00
Para elecciones	50000 00
Para eventuales	10000 00

Cartera de Policía

(Artículo 6º. Partida 16)

Para policía de villas y pueblos	₡ 70000 00
Para eventuales	6000 00
Para enseres y útiles de escritorio	4000 00
Para uniformes y armas	5000 00

No omito manifestarle que es de urgencia el pronto despacho de este asunto, especialmente por la circunstancia de que desde hace tres meses no se paga el personal de villas y pueblos y se impone regularizar esta situación. Respecto al servicio de policía de villas y pueblos es de oportunidad dejar constancia de que si bien fue la mente del Congreso reducir sensiblemente la partida asignada, las necesidades y exigencias de orden público han obligado al Poder Ejecutivo y lo obligarán a mantenerlo en el mismo pie en que antes estaba, de manera que ha resultado y resulta insuficiente la partida que antes se votó. No sería sino con menoscabo del buen servicio como habría que ajustarse a la partida que el Congreso asignó. Tengo la honra de repetirme de Ud. muy atto. y S. S. (f.) SANTOS LEÓN HERRERA, Secretario de Estado”.

Por lo expuesto por el señor Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación, y con instrucciones del señor Presidente de la República, vengo a someter a vuestra alta consideración el siguiente proyecto de ley:

El Congreso etc.

Decreta:

Artículo 1º—Auméntase el presupuesto vigente de la Secretaría de Gobernación y Policía, en la siguiente forma:

Cartera de Gobernación

(Artículo 5º. Partida 19)

Para enseres y útiles de escritorio	₡ 10000 00
Para elecciones	50000 00
Para eventuales	10000 00

Cartera de Policía

(Artículo 6º. Partida 16)

Para policía de villas y pueblos	₡ 70000 00
Para eventuales	6000 00
Para enseres y útiles de escritorio	4000 00
Para uniformes y armas	5000 00

Artículo 2º—Este decreto rige desde su publicación.
Al Poder Ejecutivo
Dado etc.

C. C.

CARLOS BRENES
Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 14 de junio de 1932.

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

El artículo 8º de la Ley Nº 52 de 15 de enero pasado dispuso que el Banco Internacional “destinará ₡ 500,000.00 para atender el servicio de Cajas Rurales de Crédito” y que “en cuanto al servicio de Cajas Rurales presentará al Poder Ejecutivo, dentro de treinta días, contados desde la promulgación de la presente ley, un proyecto de reglamento que allane las dificultades que el actual ha demostrado en la práctica”. La Junta Directiva del Banco, a raíz de la promulgación de dicha ley, trató de cumplir la obligación que se le impuso en el referido artículo; pero como el decreto relativo a la creación de Cajas Rurales de Crédito no tiene reglamentación, no ha podido hacerlo. Deseosa de facilitar lo más posible la ejecución de la mencionada ley en cuanto ella se refiere, a mediados de marzo acordó sugerir al Poder Ejecutivo las modificaciones que a su juicio deben hacerse al decreto de creación de las Cajas Rurales de Crédito para que se llenen los fines que ha tenido en mira el Congreso. Esas modificaciones están contenidas en el siguiente proyecto, que con instrucciones del señor Presidente de la República, tengo el honor de someteros:

El Congreso etc.

Decreta:

Artículo 1º—Los artículos 12, 14 y 15 del decreto Nº 33 de 30 de diciembre de 1914, ratificado por la Ley Nº 2 de 29 de marzo de 1915, se leerán como sigue:

“Artículo 12.—El Banco cargará a la Junta desde la fecha del cheque o desde el día en que se entregare alguna suma de dinero, el interés anual de uno por ciento, para gastos de administración”.

“Artículo 14.—Los miembros de la Junta responderán solidariamente al Banco de las sumas que conforme a esta ley hayan retirado, así como de los dos intereses sobre ellas al uno por ciento anual. Garantizarán su responsabilidad con primera hipoteca de bienes inmuebles, a satisfacción de la Junta Directiva del Banco y por la cantidad que ésta señale”.

“Artículo 15.—En cambio de la responsabilidad solidaria que es a cargo de los miembros de la Junta, y de la garantía real que deben rendir y para indemnizarlos de su trabajo y ocupación en estos asuntos, tendrán el derecho de tomar para sí cualesquiera utilidades netas que deje el negocio, una vez deducidos los intereses de uno por ciento anual que corresponden al Banco. Esas utilidades se repartirán por iguales partes o proporcionalmente entre los miembros de la Junta, por el Banco Internacional de Costa Rica.

La separación, muerte o incapacidad de cualquiera de los miembros de la Junta, no lo eximirá de su responsabilidad en cuanto a las sumas entregadas anteriormente”.

Artículo 2º—Las Juntas de Crédito Agrícola que funcionan actualmente pueden acogerse a la presente ley, una vez que sus miembros hayan otorgado la garantía hipotecaria a que se refiere la reforma del artículo 14.

Al Poder Ejecutivo

Dado, etc.

C. C.

CARLOS BRENES

Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 15 de junio de 1932.

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

Desde antes de tomar posesión de su cargo, el señor Presidente de la República inició gestiones para suspender temporalmente, de acuerdo con los tenedores de bonos, el pago de intereses y amortización de los empréstitos Inglés y Americano; y uno de sus primeros actos de gobernante fue enviar a los Estados Unidos a un comisionado para que las continuara. En las negociaciones habidas hasta ahora, se ha llegado a formular las siguientes bases generales de convenio; suspensión del pago de intereses y amortización de ambas deudas externas por tres años, a contar de la fecha del próximo pago de intereses de cada una. El monto de la amortización que hubiera de hacerse en dichos tres años se repartirá entre los que faltaren del plazo total del respectivo empréstito; y el fondo de amortización, a partir del año siguiente a aquel en que se reanude el servicio corriente de una y otra deudas será aumentado en el tanto que corresponde. Los cupones de intereses que vencieren en el período de la suspensión serán cambiados por bonos que se emitirán hasta por un total equivalente al monto del valor de dichos cupones. Tales bonos devengarán el 5 % anual de interés pagadero semestralmente; serán amortizados, a partir de las fechas en que se reanude el servicio regular de cada empréstito, por sorteo o por compra en mercado abierto a un precio que no exceda de la par e intereses acumulados, por medio de un fondo acumulativo y en un plazo máximo de 20 años desde su emisión, con facultad de pagarlos todos o parte de ellos en cualquiera de las fechas de pago de intereses. La garantía de esos bonos, fuera de la buena fe y crédito de la República, consiste únicamente en la prenda de los cupones de intereses convertidos. Durante el término de la suspensión del pago de intereses y amortización de los empréstitos, las sumas que anualmente debían dedicarse a esos servicios serán destinadas a pagar deudas actuales de la República y las que se contrajeren hasta el final del presente año.

Esas son sucitamente las bases generales, cuya aprobación de parte vuestra es necesaria para ultimar los arreglos. Si la merecieren, sólo quedarían los detalles a la prudente determinación del Poder Ejecutivo.

Para formalizar los convenios es preciso que el Poder Ejecutivo tenga para ello vuestra autorización, y tal es el fin del proyecto que por separado y con instrucciones del señor Presidente de la República, tengo la honra de someter a vuestra consideración.

C. C.

CARLOS BRENES

Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 7 de julio de 1932.

El Congreso Constitucional

Decreta:

Artículo 1º—El Poder Ejecutivo queda autorizado para suspender todos los pagos por concepto de intereses y amortización, tanto del "Empréstito Externo Oro con Fondo de Amortización garantizado del 7 % de 1926" como de los "Bonos Refundidos Oro del Empréstito de 1911" de la República, por un período de tiempo que comenzará, en cada caso, no más tarde de la fecha fijada para el próximo pago de intereses hasta la señalada para tal pago tres años después, inclusive. A partir del 1º de noviembre de 1936, en el caso del Empréstito de 1926, y no después del 1º de enero de

1937, en el caso del Empréstito de 1911, los pagos que la República deberá hacer para la amortización de uno y otro empréstito serán aumentados a fin de acelerar la redención o amortización de los bonos de dichos empréstitos y reponer la emisión habida en los pagos de amortización durante el período de suspensión del servicio de ambos empréstitos.

Artículo 2º—El Poder Ejecutivo queda autorizado para emitir Bonos de Conversión de la República. Estos Bonos de Conversión se emitirán por medio de dos emisiones separadas: una consistente en bonos del 1º de setiembre de 1932, que devengarán intereses desde el 1º de noviembre del mismo año, pagaderos en moneda acuñada de oro de los Estados Unidos de América de ley y peso igual a los existentes del 1º de setiembre de 1932, y sin que, tanto cuanto sea posible, pase tal emisión del monto principal que se requiere para satisfacer, según más adelante se expresa, la totalidad de la suma que por intereses hubiere de ser pagada por motivo del dicho empréstito de 1926, durante el período de suspensión de su servicio; y la otra emisión consistente en Bonos fechados no más tarde del 1º de enero de 1933 que devengarán intereses desde dicha fecha, los cuales han de ser pagados en libras esterlinas inglesas o en otra moneda que el Poder Ejecutivo por sí mismo determine y que se emitirán sin que, en lo posible, sobrepasen el capital requerido, según más adelante se dispone, para satisfacer la suma total de intereses debidos por razón de los Bonos Refundidos del Empréstito de 1911 durante el período de suspensión del servicio de dicho empréstito. Los Bonos de cada una de las emisiones vencerán en un término no mayor de veinte años, contados desde la fecha de su emisión, devengarán intereses al tipo de 5% anual, pagaderos semestralmente, serán amortizados a partir de 1935 por medio de un fondo acumulado de amortización calculado para retirar, por compra o redención, a su vencimiento o antes, todos los Bonos de tal emisión, por un precio que no exceda de su valor a la par e intereses acumulados. Todos los pagos que deben hacerse en relación con los Bonos de Conversión estarán libres de deducción o disminución por concepto de impuestos, contribuciones, derechos establecidos, o que se impongan por la República, Municipalidades o cualesquiera otras autoridades facultadas para hacerlo, tanto en tiempo de paz como de guerra, y sin tomar en cuenta la nacionalidad o residencia del tenedor. La República se reserva el derecho de redimir a opción suya, todos o parte de los Bonos de Conversión en cualquiera de las fechas fijadas para el pago de intereses, por su valor a la par e intereses acumulados.

Artículo 3º—Los Bonos de Conversión constituirán obligaciones directas de la República, que compromete toda su buena fe y crédito al debido y puntual pago, a su vencimiento, del principal, intereses, amortizaciones y de cualesquiera otras sumas que deban pagarse en relación con los mismos. La República incluirá cada año en su Presupuesto de gastos las partidas necesarias para atender en su totalidad el servicio semestral de los Bonos de Conversión de cada una de las emisiones. Los Bonos de Conversión de ambas emisiones estarán especialmente garantizados por los cupones de intereses entregados a cambio de Bonos de Conversión de las respectivas emisiones tal como en adelante se dispone. Dichos cupones quedarán en vigor hasta tanto no se haya completado el pago total de los Bonos de Conversión garantizados por esos cupones.

Artículo 4º—El Poder Ejecutivo queda autorizado para emitir Bonos de Conversión de la emisión en dólares cambiables por un valor nominal equivalente al de los Cupones pertenecientes a los Bonos del Empréstito de 1926 que venzan durante el período de suspensión del servicio de este empréstito, deducida cualquier suma que hubiere sido pagada sobre tales cu-

pones, para emitir Bonos de Conversión de la emisión en libras esterlinas cambiables por un valor nominal equivalente al de los cupones pertenecientes a los Bonos Refundidos del Empréstito de 1911, que venzan durante el período de suspensión del servicio de ese Empréstito, deducida cualquier cantidad pagada sobre tales cupones.

Artículo 5º—Con sujeción a las disposiciones de esta ley, el Poder Ejecutivo queda autorizado para determinar: a) la forma, términos y rubricación, tanto de los Bonos de Conversión de cada una de las emisiones, como de los cupones de intereses agregados a ellos o de cualquier otro documento o certificado adicional que se emita con relación a ellos; b) los términos, condiciones, fechas y modo de hacer las emisiones, servicio, reducciones extraordinarias, compra y redención por medio del fondo de amortización de los Bonos de Conversión de cada una de las emisiones; c) las disposiciones para proteger a los tenedores de los Bonos de Conversión de cada una de las emisiones; d) el arreglo de todo otro asunto relacionado con la emisión, entrega y servicio de los Bonos de Conversión no estipulado aquí específicamente. El Poder Ejecutivo queda autorizado para otorgar escrituras, aprobadas por él en su forma y fondo, con el objeto de estipular los términos de los Bonos de Conversión de cada una de las emisiones, y para hacer las declaraciones, convenios, renunciaciones—tanto de las leyes de la República, como de las de cualquier otro país incluidas las que limitan el tiempo para el cobro de los cupones de intereses después de su vencimiento—y cualesquiera otros convenios que por parte de la República se juzguen necesarios o pertinentes para dar cumplimiento a esta ley. El Poder Ejecutivo queda facultado para iniciar y entablar negociaciones por medio de su apoderado debidamente facultado, para nombrar agentes fiscales de los Bonos de Conversión de cada una de las emisiones, consultar abogados, anunciar públicamente, solicitar de las bolsas de valores la inscripción de los Bonos de Conversión de ambas emisiones, y, en general, para actuar y hacer contratos en nombre de la República que no se opongan a la presente ley y que a juicio del Poder Ejecutivo fueren necesarios o indispensables para la ejecución de la misma, sin necesidad de someterlos a la aprobación del Congreso.

El Poder Ejecutivo queda autorizado para pagar todos los honorarios y gastos relacionados con la transacción, incluyendo, si los hubiere, el de timbre y otros impuestos y derechos a que pueda estar sujeta la emisión. la entrega o recibo de los Bonos de Conversión, de los certificados, si los hubiere, y de las escrituras, de acuerdo con las leyes vigentes de la República, de los Estados Unidos de América y del Reino Unido e Irlanda Septentrional, o de cualquier subdivisión política de los mismos.

Artículo 6º—Durante el período de suspensión del servicio de los empréstitos mencionados en el artículo 1º, la República continuará incluyendo en su Presupuesto anual de gastos ordinarios las sumas que se necesitarían para pagar la totalidad del servicio anual de aquellos empréstitos. Una cantidad igual a esas sumas anuales será incluida como entrada en los presupuestos y dedicada a pagar deudas presentes de la República y las que se contraigan hasta el 31 de diciembre de 1932.

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dado, etc.

Congreso Constitucional

CARLOS BRENES

Secretario de Estado en el

Despacho de Hacienda y Comercio

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

Por motivo de la enorme disminución sufrida por las rentas nacionales, en ley Nº 8 que tuvisteis a bien emitir con fecha treinta y uno de julio del año próximo pasado fue aumentado el gravamen de importación de mercaderías en un diez por ciento sobre los derechos de aduana, propiamente dichos, exceptuando las sustancias alimenticias que en la misma se detallan.

Como persisten las razones que originaron la emisión de aquel decreto, y no es posible aun prever el fin de esa situación, estima el Poder Ejecutivo de conveniencia prorrogar prudencialmente por un término igual los efectos de tal disposición.

Es por esa causa que con instrucciones del señor Presidente de la República, tengo la honra de someter a vuestras deliberaciones, el siguiente proyecto de ley:

El Congreso etc.

DECRETA:

Artículo 1º—Prorróganse hasta el seis de agosto de mil novecientos treinta y tres, los efectos de la ley Nº 8 de 1º de agosto de 1931 que, como disposición de emergencia y con las excepciones que la misma prescribe, recarga la mercadería en general en un diez por ciento sobre los derechos de aduana propiamente dichos.

Artículo 2º—Este decreto rige desde el 6 de agosto próximo entrante.

C. C.

CARLOS BRENES

Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 14 de julio de 1932.

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

En mi exposición Nº 6 enviada a ese Alto Cuerpo con fecha 14 de junio próximo pasado, solicité un crédito de ocho mil setecientos cincuenta colones (¢ 8,750.00) como ampliación a la partida asignada en el presupuesto vigente para aprehensiones en la Inspección General de Hacienda, por haberse ésta agotado en el pago de cuentas por tal concepto correspondientes al año anterior; mas al revisar las cuentas pendientes, nos encontramos con que aquella suma apenas alcanzará para cubrir deudas pendientes y que no queda provisión para lo que resta del presente ejercicio económico.

Por tal motivo, con instrucciones del señor Presidente de la República os ruego tengáis por aumentada hasta quince mil colones la partida para aprehensiones a que aquella exposición se refiere.

Reitero a esa Honorable Cámara Legislativa las muestras de mi aprecio y consideración,

CARLOS BRENES

Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

En el informe que sobre el movimiento judicial correspondiente al año mil novecientos treinta envió la Corte Suprema a la Secretaría de Justicia, aquel Poder hizo notar lo reducido de la partida de cincuenta mil colones votada para atender a los gastos de todas las oficinas de la República; y en sesión plena celebrada el treinta y uno de agosto último, solicitó una ampliación que no fue concedida y se principió el presente año con un sobregiro.

En el presupuesto de este año en vez de aumentarse aquel renglón, fue reducido a veinte mil colones, suma que de haberse destinado a cancelar las cuentas a la sazón pendientes, habría dejado un reducidísimo saldo para atender erogaciones del presente ejercicio económico.

Aquel Supremo Tribunal en sesión celebrada el diez y nueve de junio anterior, conoció del informe rendido por su Secretario sobre el monto de las cuentas a pagar que ascienden a veinte mil quinientos colones contándose apenas para cubrir las, con un saldo de once mil ochocientos cuatro colones y cuarenta y nueve céntimos.

Tal situación de morosidad ha cerrado las puertas del crédito y hoy confronta la Corte Suprema serias dificultades para conseguir que el comercio le suministre cuando menos, aquellas mercaderías cuya falta pudiere originar el paro de la tramitación judicial.

Por otra parte, la partida de "Conjueces", que en el presupuesto de mil novecientos treinta y uno ascendía a diez mil colones (¢ 10,000.00), fue reducida a cuatro mil colones (¢ 4,000.00) y según datos de la Oficina de Control, el saldo disponible montaba el diez y siete de junio último a ciento treinta y dos colones, cuarenta y seis céntimos, suma insuficiente para cubrir las dietas devengadas en ese mes.

En oficio de diez y siete de citado junio, el señor Secretario de Relaciones Exteriores hace ver la conveniencia de gestionar ante esa Honorable Cámara, la declaratoria de que el artículo 21 de la Ley de Presupuesto de 23 de febrero pasado, no rige en orden a las partidas de "Gastos Judiciales", y "Conjueces", porque en cuanto a la primera no es posible sujetarse a esa disposición legal porque los útiles de escritorio son suministrados a las oficinas judiciales semestralmente por razones que no se ocultarán a los señores Diputados, y respecto de la segunda porque la presencia de Conjueces no está sujeta ni puede estarlo a distribución mensual, dadas las circunstancias de diversa índole que motivan su intervención, de tal manera que en unos meses hay más dietas que en otros, de acuerdo con las exigencias de los negocios en trámite.

Por las razones expuestas, a solicitud del Supremo Tribunal de Justicia, y en acatamiento a instrucciones del señor Presidente de la República, me es honroso proponer a las deliberaciones de esa Honorable Cámara el siguiente proyecto de decreto:

El Congreso etc.

Decreta:

Artículo 1º—Amplíense las siguientes partidas del presupuesto vigente del Poder Judicial, así:

Gastos Judiciales	¢ 40000 00
Conjueces	4000 00

Artículo 2º—Interpretando el artículo 21, Ley de Presupuesto vigente, se declara que sus disposiciones no rigen para los renglones “Gastos Judiciales” y “Conjueces”, antes mencionadas.

C. C.

CARLOS BRENES
Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 14 de julio de 1933.

Nº 20

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

Tengo el honor de transcribiros los siguientes oficios, que la Secretaría de Gobernación ha tenido a bien enviar a este Despacho:

“San José, 17 de mayo de 1932. Señor Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Policía. S. D. Muy señor mío: A los pocos días de tomar posesión de mi puesto en esta Dirección General de Tráfico pude convencerme que el número de Inspectores para la vigilancia de esta ciudad, lo mismo que para las carreteras pavimentadas San José-Naranjo y San José-Cartago, era deficiente por el escaso número de su personal. La razón es obvia: ese número existe desde la creación de este Departamento, cuando ni había pavimento en esta ciudad ni en las carreteras ni un tráfico en la proporción a que ha llegado durante los últimos años. Próximamente se inaugurará la carretera a Coronado que como es natural absorberá para su cuidado y atención parte del escaso personal con que cuento. El producto bruto en el año próximo pasado fue de ₡ 177,873.60. Los gastos generales o sean empleados, gasolina, uniformes, etc., fueron de ₡ 59,639.43. El saldo o diferencia entre estas dos sumas de ₡ 118,234.17, fue repartido proporcionalmente entre las Municipalidades favorecidas. El señor Ministro con su claro criterio comprenderá la urgente necesidad de ampliar el presupuesto para este Departamento en la suma necesaria y en conformidad con el crecimiento que ha tenido el tráfico en los últimos años. Es lógico y razonable que si esta dependencia oficial tiene fondos propios que ingresan en beneficio de las Municipalidades, debería también reservarse de esta suma la cantidad indispensable para hacer una ampliación de su presupuesto a fin de obtener en lo sucesivo un servicio más eficiente. Por las razones expuestas muy respetuosamente me permito proponer a Ud. para que si lo tiene a bien se sirva hacerlo saber al señor Presidente de la República, la conveniencia a mi juicio de que se amplíe el presupuesto de esta oficina en la suma de ₡ 15,000.00 por año para invertir dicha ampliación en la siguiente forma:

	Al mes	Al año
5 Inspectores a ₡ 110.00 cada uno	₡ 550	₡ 6600 00
Gasolina y repuestos motocicleta		4700 00
Uniformes y capas		2400 00
Papelería y útiles escritorio		1300 00
		<hr/>
Total al año		₡ 15000 00

De Ud. muy atto. S. S., Ric. Tinoco, Director Gral. de Tráfico”; y el siguiente: “San José, 17 de mayo de 1932. Señor Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación. S. D. Muy señor mío: Me permito incluir a Ud.

una cantidad de cuentas que he recibido del comercio, y cuyo detalle lo encontrará en pliego adjunto. Por los informes que he obtenido en esta Oficina, de dichas cuentas, resulta que todos esos valores están correctos y que las mercaderías indicadas en cada factura fueron debidamente recibidas por este Departamento. Como el Tráfico tiene fondos propios, y como el comercio se manifiesta urgido por la cancelación de dichas cuentas, le estimaría a Ud. tomar alguna providencia sobre el particular, o proponer al Congreso, si lo tiene a bien, dé una ampliación del presupuesto para proceder al pago de las mencionadas cuentas. De Ud. muy atto. S. S., Ric. Tinoco, Director Gral. de Tráfico.

Lista de las cuentas que debe la Dirección General de Tráfico hasta la fecha

Compañía Automotriz	₡ 143 75
Imprenta José María Arias	70 00
Ciclo Club	110 65
La Nueva Prensa	30 00
Robert Hermanos	44 00
Koberg y Co.	628 00
Pablo Walter	78 50
A. Borbón y Co.	52 10
Alfredo Chaves	35 00
Ramón Ulloa y Co.	21 00
Miguel Macaya y Co.	69 70
Gomes and Co	438 00
C. Alvarado y Co.	167 70
La Prensa Libre	45 00
Francisco Müller	34 00
Carlos Federspiel y Co.	12 00
Sauter y Co.	1030 50
Ricardo Albarracín	436 40
Ricardo Albarracín	380 00
 Total	 ₡ 3826 30

Por lo expuesto, y con instrucciones del señor Presidente de la República, vengo a someter a vuestra ilustrada consideración, el siguiente proyecto de ley:

El Congreso etc.

DECRETA:

Artículo 1º—Ampliase el Presupuesto vigente con las siguientes partidas para la Dirección General de Tráfico en la suma de ₡ 15,000.00 por año para invertir dicha ampliación en la siguiente forma:

	Al mes	Al año
5 Inspectores a ₡ 110.00 cada uno	₡ 550 00	₡ 6600 00
Gasolina y repuestos motocicleta		4700 00
Uniformes y capas		2400 00
Papejería y útiles escritorio		1300 00
 Total		 ₡ 15000 00

Artículo 2º—Destínase la suma de ₡ 3,826.30 para pagar las cuentas pendientes de dicho Departamento.

Al Poder Ejecutivo
Dado etc.

C. C.

CARLOS BRENES
Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 15 de julio de 1933.

Nº 22

San José, 15 de julio de 1932

Sres. Miembros de la Comisión del Congreso Constitucional, encargada de informar sobre la suspensión de pagos de los empréstitos inglés y americano.

S. D.

El Comisionado del Gobierno para celebrar el convenio de suspensión de pagos de los empréstitos inglés y americano, sugiere que el Congreso extienda la autorización para suspender pagos a los del empréstito para la electrificación del Ferrocarril al Pacífico.

Si la Comisión estuviere de acuerdo con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, esta Secretaría le ruega proponer en su dictamen, como un artículo especial del respectivo decreto, que se suspenda también el servicio de los Bonos del Ferrocarril al Pacífico y se celebre un convenio semejante, en cuanto fuere posible, a los que han de formalizarse en relación con los otros dos empréstitos dichos.

Aprovecho esta oportunidad para manifestar al Congreso, por el digno medio de ustedes, que el Poder Ejecutivo no ha firmado ningún convenio en relación con esos asuntos y que precisamente la autorización que solicita es para ese fin.

Con protestas de alta estima, soy de los señores miembros de la Comisión, muy atento y seguro servidor,

CARLOS BRENES
Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

Nº 23

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

Por ley Nº 12 de 15 de agosto de 1931, se elevó el aforo de los fósforos de madera de ₡ 0.80 por kilo a ₡ 5.00, quedando refundido en esta tasa el impuesto de conversión que pesaba sobre dicho artículo a razón de ₡ 1.75 por kilo, peso legal; es decir, que el gravamen aduanero sin tomar en cuenta los recargos, fue aumentado en ₡ 2.45 por kilogramo, de ₡ 2.55 a ₡ 5.00. En cambio, las cerillas y fósforos de cera, que señala la partida 95, no fueron afectadas por aquella ley y pagan ₡ 3.15 por kilo, o sea ₡ 1.40 de aforo más ₡ 1.75 por impuesto de conversión, de tal manera que hoy el gravamen sobre esos dos artículos en Aduana, incluyendo los otros impuestos, es así:

Fósforos de madera, cada kilo, peso legal	₡ 5 33
Cerillas y fósforos de cera, cada kilo peso legal	3 40
Diferencia a favor de las cerillas	1 93

Esta anomalía de nuestra legislación arancelaria, ha sido explotada por el comercio que importa y distribuye esos artículos, con el resultado de que la importación de cerillas tiende día con día a sustituir la del fósforo de madera, sin que la intención del legislador al aumentar el aforo de éstos fuera otra,—para fines netamente fiscales,—que imponerles un mayor tributo, tal como lo han hecho otros países por medio del monopolio, del impuesto de consumo o del Arancel de Aduanas.

Perseguía el mayor aforo obtener aproximadamente unos ₡ 260,000.00 anuales sobre el producto de la renta aduanera de entonces, que fue de ₡ 262,300.00; pero el cambio de dirección en el consumo por efectos del aumento, que el legislador no pudo prever, dará por resultado que el Fisco perciba únicamente ₡ 240,000.00 anuales por concepto de la importación de cerillas en lugar de los ₡ 262,300.00, que obtuvo antes del cambio del aforo, es decir, no se obtendrá ningún aumento, sino pérdida, en el caso de que la cerilla venga a sustituir,—como hay marcada tendencia,—al fósforo de madera, y urge arreglar sin tardanza esta anormal situación que actualmente irroga al Fisco una pérdida que se calcula en ₡ 12,000.00 mensuales y que puede subir a unos ₡ 20,000.00 por mes.

La anormalidad de esta situación la evidencian estos datos:

Una caja de fósforos de madera paga ₡ 306.00 o sea ₡ 0.425 por 10 cajetillas.

Una caja de cerillas paga ₡ 136.00 o sea ₡ 0.188 por 10 cajetillas.

Diferencia a favor de las cerillas ₡ 170.00 o sea ₡ 0.237 por 10 cajetillas.

Al menor gravamen hay que agregar también el peso inferior de la cerilla que da por resultado que un kilo de fósforos de madera que paga por Aduana ₡ 5.33 equivale,—en cuanto a cantidad,—a 694 gramos de cerillas que contribuyen únicamente al Fisco con ₡ 2.40 por derechos y todo otro recargo. Por consiguiente es de absoluta necesidad aumentar el aforo de las cerillas y fósforos de cera pues de no hacerlo así se nulificarán los efectos del decreto N° 12 de 15 de agosto de 1931, que tuvo en mira, al elevar el aforo sobre los fósforos, procurar a la renta aduanera, un aumento aproximado de un cuarto de millón de colones.

Con un aforo de ₡ 7.00 para las cerillas y fósforos de cera, que guarda y establece relación con el de ₡ 5.00 que pesa sobre los fósforos de madera, el kilo de cerillas pagaría ₡ 7.45, sin el impuesto de emergencia, y los 694 gramos, equivalentes a un kilo de fósforos de madera, pagarían ₡ 5.17 contra ₡ 5.33 que es actualmente el gravamen aduanero absoluto por kilo de los de madera; y siendo el valor principal de las cerillas, mayor que el de los fósforos de madera, queda justificado el mayor aforo para establecer una graduación equitativa.

Por los motivos expuestos, con instrucciones del señor Presidente de la República, tengo la honra de proponer a la consideración de esa Honorable Cámara Legislativa, el siguiente proyecto de ley:

El Congreso etc.

Decreta:

Artículo 1º—Las cerillas y fósforos de cera se pasan a la partida 99

bis del Arancel de Aduanas y pagarán ₡ 7.00 por cada kilogramo quedando en este aforo comprendido el impuesto de conversión.

Artículo 2º—Este decreto rige desde su publicación.

Dado etc.

C. C.

CARLOS BRENES

Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 22 de julio de 1933.

Nº 25

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

La importancia de mantener las relaciones internacionales en un pie de cordialidad es una axioma que no se discute, y es sin disputa Panamá uno de los países que con mayor imperio exigen que se mantengan en grado muy alto los sentimientos de cordialidad y buena inteligencia que hoy felizmente existen.

En el presupuesto de gastos del presente año no figura partida para el sostenimiento de nuestra Legación en Panamá. La Administración anterior no retiró al Ministro Plenipotenciario acreditado ante el Gobierno de aquella República, y la presente tampoco lo ha hecho hasta ahora porque piensa el Poder Ejecutivo que es conveniente mantener aquella Legación, entre otras razones porque en virtud de la vecindad, con frecuencia ocurren dificultades originadas en imprudencias, ora de los ciudadanos, ora de las propias autoridades residentes en la región fronteriza, y la presencia de un representante nuestro que esté en constante comunicación con el Gobierno de aquel país, facilita el pronto y amistoso arreglo de cualquier pequeño incidente, que pudiera presentarse con tal motivo, y afianza mejor las buenas relaciones que mantienen ambos países limítrofes. Son ésas, sin duda, las razones del Gobierno panameño para mantener entre nosotros una Legación de primera clase; y un deber de cortesía nos obliga, por otra parte, a corresponder manteniendo la que tenemos acreditada ante aquél. Pero es el caso que no se ha podido girar para los gastos que la nuestra demanda, porque no hay asignación para ello.

No trata el Gobierno de restablecer una Legación puesto que la existente no ha sido retirada, sino de pedirnos que fijéis una partida en el Presupuesto vigente que permita cubrir los gastos ya hechos y pagar los correspondientes al resto de este año.

En el ejercicio económico último figuraba esa Legación con quinientos dólares mensuales; pero ahora, atendiendo a las condiciones económicas, la mayor prudencia aconseja rebajarla a cuatrocientos dólares, y por si estuviereis en ello de acuerdo, con instrucciones del señor Presidente de la República, tengo la honra de proponeros el siguiente proyecto de ley:

El Congreso etc.

Decreta:

Artículo 1º—Adiciónase la partida 5ª, artículo 10, Ley de Presupuesto vigente, así: *Legación de Panamá*. Sueldo del Ministro, \$ 400.00 mensuales al cuatrocientos por ciento, en los meses de agosto a diciembre: \$ 2,000.00.

Artículo 2º—Se autoriza al Poder Ejecutivo para pagar en la misma proporción, el sueldo del Ministro en Panamá durante el período transcurrido entre el primero de marzo y el treinta y uno del presente mes.

C. C.

CARLOS BRENES
Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 26 de julio de 1932.

Nº 27

Señores Secretarios del Congreso Constitucional

El decreto N° 56 que ese Alto Cuerpo tuvo a bien dictar el dieciocho de los corrientes, impone a las sociedades que se organicen en el extranjero para fundar cualquier clase de Banco en la República, y a los bancos que en la misma se establezcan como sucursales de instituciones bancarias extranjeras,—independientemente de las otras obligaciones especificadas en las leyes de Bancos y de Sociedades Mercantiles,—la de mantener en el país para sus operaciones corrientes, una suma no menor de dos millones de colones, sin que forme parte de ese capital el dinero de los depositantes ni los saldos que arroje la cuenta "Ganancias y Pérdidas", y compele a las sucursales de los bancos extranjeros establecidas en el país, a presentar a la Secretaría de Hacienda o a un delegado suyo, dentro de los noventa días siguientes a la promulgación de aquella ley, y después cada tres meses, un balance certificado de su Activo y Pasivo en que se muestre con claridad que sus carteras comprenden en su haber la cantidad representativa de los depósitos a su cargo, más los dos millones de colones que como capital propio se estipulan anteriormente, sin que esa cantidad pueda estar en valores extranjeros ni representada en depósitos en el exterior. Prohíbe, además, que la caja de esas sucursales sea menor de un treinta por ciento en relación con sus depósitos, y obliga a las sucursales de bancos extranjeros establecidos actualmente en el país, a ponerse en un plazo de tres meses, dentro de las prescripciones indicadas.

En orden a ese decreto el apoderado generalísimo del Royal Bank of Canada en esta ciudad, formuló una protesta por considerar que establecida dicha sucursal al amparo de las leyes vigentes en la fecha de su creación, tiene derechos adquiridos para mantener su organización y esfera de negocios con arreglo a aquellos mismos cánones, sin que ninguna ley posterior pueda,—por su no retroactividad,—alterar con nuevas exigencias las bases esenciales de su funcionamiento. Además, el señor Representante Consular de la Gran Bretaña, en representación verbal ante esta Secretaría, se manifestó en contra de aquel decreto, invocando el tratado existente entre su nación y la nuestra.

Ahora bien: debiendo según el espíritu y la letra del pacto de amistad, comercio y navegación consentido entre esta República y el Reino Unido de la Gran Bretaña, cuyas ratificaciones fueron canjeadas el 20 de febrero de 1850, gozar los súbditos ingleses,—en el caso concreto la "Sucursal del Royal Bank of Canada",—de perfecta y completa protección en sus personas como en sus propiedades, de libertad de comercio, de completa protección y seguridad para el mismo, y para todo ello de los mismos derechos y privilegios de que disfrutaban los costarricenses, estima el Poder Ejecutivo que si la legislación bancaria es modificada solamente en cuanto a las sucursales de bancos extranjeros, no recibe la del Banco Inglés igual tratamiento que las otras instituciones similares del país, y con sobrada razón podría

decirse que se está faltando a la protección estipulada en el tratado; y que por ser la expresada sucursal de un banco extranjero la única establecida en Costa Rica, el decreto que comento no tiene carácter general sino especialísimo, limitativo de la libertad de comercio y de excepción con respecto a las demás casas bancarias puesto que sería aplicable exclusivamente a dicha sucursal, y podría argüirse que es violatorio de la garantía constitucional consagrada por el artículo 12 de la Carta Fundamental.

El Poder Ejecutivo, por mi medio, tiene la pena de devolveros el relacionado decreto sin la sanción correspondiente y espera que en mérito de las razones expuestas sea reconsiderado por el Soberano Congreso, haciéndolo extensivo a todas las otras instituciones bancarias establecidas aquí, para obviar el inconveniente apuntado.

CARLOS BRENES

Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 27 de julio de 1932.

Nº 29

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

El sostenimiento de todos los jóvenes a quienes ese Alto Cuerpo tuvo a bien favorecer con un auxilio para hacer estudios en universidades extranjeras, ha sido cuestión que preocupa tanto al Gobierno como al país en general, y muy especialmente a los propios interesados.

En el Presupuesto vigente para la Secretaría de Educación Pública, aparece el "Renglón 26—Becas en el Exterior", en que se dispone para tales fines de la suma de quince mil dólares, pero aquel Despacho reduciendo en lo posible los gastos contemplados por esa partida, ha enviado sus cálculos de los cuales resulta que disminuyendo el monto de esos auxilios, se podrían conservar veinticuatro bequistas con una pensión de cincuenta dólares, dos bequistas con sesenta dólares y uno con treinta dólares, sumas mínimas con que escasamente podrían atender sus necesidades más precisas, lo que nos irrogaría un gasto anual de dieciocho mil novecientos dólares, inclusive los dos mil setecientos dólares con destino a los gastos de matrícula, sea por todo tres mil novecientos dólares más de la cantidad que tuvisteis a bien votar para esas atenciones. Tales gastos se reducirán notablemente en los años sucesivos al terminar varios de los agraciados sus estudios.

Considera el Poder Ejecutivo que no debe troncharse la carrera a que esos jóvenes han dedicado su mayor esfuerzo, y que es preferible llegar al sacrificio para el logro de esas aspiraciones. El gasto sobre lo presupuesto es relativamente pequeño y bien vale la pena hacerlo para utilizar el aprovechamiento de tan aventajados bequistas.

Por si el Soberano Congreso abundare en esas mismas razones y creyere atendible la excitativa, con instrucciones del señor Presidente de la República, y con ruego de que os sirváis resolver este asunto en lo que falta del presente período de sesiones ordinarias, tengo el honor de someter a vuestras ilustradas deliberaciones el siguiente proyecto de ley:

El Congreso etc.

Decreta:

Artículo único.—Ampliase hasta la suma de dieciocho mil novecientos dó-

lares (\$ 18,900.00) la partida "26—Becas en el Exterior", del presupuesto vigente de la Secretaría de Educación Pública.

C. C.

CARLOS BRENES

Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 8 de agosto de 1932.

Nº 31

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

El Poder Ejecutivo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de la ley Nº 33 de 10 de junio del año pasado y del inciso 27 del artículo 102 de la Constitución, dictó el 10 de este mes el reglamento para la administración del monopolio de gasolina, confiada al Banco Nacional de Seguros.

La Junta Directiva del Banco, según notas de los días 10 y 11 de los corrientes, ha hecho presente a este Despacho su inconformidad con el reglamento y su absoluta oposición a los artículos 1º, 2º y 10 del mismo. Las razones, que aduce para ello, según reza el respectivo acuerdo transcrito a esta Secretaría, son las que se exponen por su orden, a continuación:

"En cuanto al artículo 1º—El artículo 2º de la ley enunciada (la Nº 33 dicha) pone a cargo exclusivo del Banco Nacional de Seguros la administración del monopolio de la gasolina. Este Banco es, por lo tanto, el único responsable de tal administración.

La construcción de la planta e instalaciones, la compra de estaciones y la provisión de gasolina, son, a juicio de esta Junta, actos de estricta administración del monopolio.

La licitación que se haga para obtener cualquiera de esas operaciones es un medio de llegar a ella, esto es, un trámite simplemente accesorio de la misma. En igual condición se halla la aceptación de cualquier propuesta relativa a alguna de las operaciones mencionadas, así como la repulsa de una de esas propuestas, o de todas.

Es, pues, al Banco Nacional de Seguros a quien incumbe la licitación y aceptación de que hablamos. Esto sin perjuicio, naturalmente, de la suprema fiscalización que el Gobierno, por medio de los funcionarios que a bien tenga elegir al efecto, quiera ejercer en lo tocante a los actos enumerados, o a otros cualesquiera de la administración del monopolio.

Para este Banco sería motivo de gran satisfacción que el Director del Banco Internacional de Costa Rica y el Director del Crédito Hipotecario de Costa Rica hicieran, como delegados del Gobierno, la fiscalización de cualquiera de los actos de la administración del monopolio. No puede haberse pensado en mejores vigilantes; pero, a nuestro ver, la licitación no debe ser efectuada sino por el Banco Nacional de Seguros, solo, así como la aceptación o el rechazo de cualquier propuesta conectada con ella, por razones que ya expusimos.

Cabe en el caso, en consecuencia, la fiscalización, mas no la intervención con voto decisivo, de los otros Bancos del Estado, si se respeta el espíritu y la letra de la primera parte del artículo 2º de la ley del monopolio. La tesis contraria conduciría a quitar de las manos del Banco Nacional de Seguros, y ponerla en otras, la realización de actos de administración del monopolio, de los cuales debe ser esta institución el único responsable, una vez que a ella los encomendó la ley".

Conviene reproducir el artículo 1º del reglamento, objeto de la repulsa. Dice así:

“El Banco Nacional de Seguros con intervención del Director del Banco Internacional de Costa Rica y del Director del Crédito Hipotecario de Costa Rica, como delegados éstos de la Secretaría de Hacienda, sacará a licitación pública la construcción de la planta e instalaciones, la compra de estaciones y la provisión de gasolina. En la relativa a provisión de gasolina solamente podrán tomar parte empresas productoras de ese artículo. El anuncio de la licitación será publicado por lo menos seis días en La Gaceta y en otros dos diarios de esta ciudad de los de mayor circulación. Entre la primera publicación y la fecha que se fije como final del término para recibir propuestas, deberá mediar un plazo prudencial no menor de dos meses. Si para la adjudicación hubiere uniformidad de pareceres se tendrá por definitivamente hecha, y si no hubiere acuerdo unánime, la adjudicación la hará la Secretaría de Hacienda previas las diligencias que estime del caso”.

Bien claro se ve que el Banco entiende que el Congreso al encomendarle la administración del monopolio de la gasolina lo erigió en árbitro absoluto de esa administración. Tal error sólo es explicable porque en el año y pico trascurrido desde que fue dictada la mencionada ley N^o 33 de 10 de junio de 1931, la Junta Directiva hubiera olvidado los términos claros de ese decreto, especialmente los del artículo 2^o que dice:

“La Secretaría de Hacienda dictará la reglamentación necesaria para la administración del monopolio que estará a cargo exclusivo del Banco Nacional de Seguros”.

En cumplimiento de ese texto, y aun en el silencio de la ley, por lo que respecta a su reglamentación, el Poder Ejecutivo tuvo facultad bastante para dictar como dictó, el reglamento que motiva la protesta del Banco, de acuerdo con el artículo 102, inciso 27 de la Constitución que prescribe entre otros deberes y atribuciones de aquel Poder, la de expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución de las leyes.

El artículo 1^o del decreto del Poder Ejecutivo no es sino un desarrollo del 3^o de la ley de creación del monopolio:

“Las compras de gasolina para el consumo del Estado y de particulares, se harán siempre por medio de licitación anunciada en ese diario oficial y en otros dos diarios de la capital y previa fijación de un plazo para abrir los pliegos de propuestas suficientemente amplio y en relación con la distancia del domicilio principal de las empresas productoras”.

Es verdad que en la letra de ese texto solamente se hace referencia a las compras de gasolina; pero no es menos cierto que no habiéndose expresado en él que la construcción de la planta e instalaciones y la compra de estaciones pueden hacerse directamente sin sujeción a regla alguna, es de absoluto rigor el acatamiento del artículo 747 del Código Fiscal, conforme al cual “todos los contratos que celebre el Gobierno, sea para la compra de materiales y especies, sea para la construcción de una obra o edificio, deberán ser precedidos de licitación publicada por la Secretaría de Estado correspondiente, en el periódico oficial”, y a menos que se piense que tales obras y utensilios no son de propiedad del Estado.

El artículo copiado del acuerdo en que el Banco formuló su protesta contra el reglamento, revela que el principal motivo estriba en la designación de los dos delegados de la Secretaría de Hacienda para intervenir en todo lo referente a las licitaciones. El Poder Ejecutivo está en la creencia de que no ha hecho sino interpretar el pensamiento del Congreso de que ellas se lleven a efecto de modo que satisfagan ampliamente al país y por esa razón dispuso que intervinieran en esos actos, dos delegados de la Secretaría de Hacienda. No dejó la designación de ellos en cada caso a la voluntad de la persona que desempeñara la Secretaría y de una vez indicó a los dos Directores de los otros dos Bancos del Estado, quienes por sus

relevantes prendas personales, su comprobada habilidad en el manejo de las instituciones que les están confiadas y su larga experiencia en los negocios, han de ser colaboradores muy eficientes de la Junta Directiva del Banco Nacional de Seguros, la cual, lejos de sentirse contrariada, ha debido quedar muy complacida por que el Ejecutivo haya escogido para delegados suyos a esos altos y prestigiados servidores de la Nación.

Ocurre frecuentemente que en el análisis de las propuestas y en la determinación de la más ventajosa entre ellas, aún los más expertos se dividen en sus opiniones; fue en previsión de ese evento que se dispuso que de no haber conformidad de pareceres entre la Junta Directiva del Banco y los delegados de la Secretaría de Hacienda, ésta haría la adjudicación previas las diligencias que estimare del caso, por ejemplo la consulta de otras opiniones igualmente merecedoras de ser consideradas. En ese particular no ha guiado a la Secretaría sino un anhelo de acertar lo más posible en beneficio de los intereses nacionales.

Ha tenido noticia la Secretaría de Hacienda de que, aunque no se expresa en el acuerdo, el Banco Nacional de Seguros no está conforme en que se licite nuevamente la construcción de la planta e instalaciones porque ya fueron licitadas, y tiene en mano las propuestas recibidas. Parece que tal informe fuera cierto porque en la carta cuya copia acompaño, dirigida con fecha veintisiete de julio próximo pasado, por el Subgerente de la Limon Trading Company al Director del Banco, se lee lo siguiente:

“Tenemos el gusto de referirnos a la licitación para la construcción del tanque al servicio del monopolio de gasolina. El 30 de marzo enviamos a usted nuestra licitación para la instalación del tanque, ciéndonos a las regulaciones por usted indicadas; poco tiempo después Uds. nos solicitaron ciertas explicaciones referentes a nuestra licitación y para obtener mayor claridad respecto a los detalles por ustedes requeridos, optamos por cablegrafiar a nuestro ingeniero, haciéndole venir a San José desde Nueva York, para que él se pusiera en contacto con ustedes y explicara todo lo concerniente al asunto. En la seguridad de que sometimos a ustedes una propuesta a precio absolutamente de costo, nos encontramos autorizados para pensar que ella, indudablemente, fue la más baja entre todas las que se les enviaron y consecuentemente, hemos hecho permanecer aquí al señor Flanagan, causándonos esto considerables gastos, pero con la esperanza de que el contrato nos sería adjudicado y así el propio señor Flanagan se encargaría de la supervigilancia y ejecución de la obra. Nuestro ingeniero ha permanecido ya cuatro meses en este país, dedicado al proyecto que nos ocupa, y siente no poder continuar en las mismas condiciones por más tiempo. De otro lado, cuando sometidos al examen nuestra oferta, en marzo, valoramos, naturalmente, el material, a los precios que regían en esa época. Ahora hemos recibido comunicaciones que nos hacen creer que al presente tendremos que pagar mayores sumas por el mismo material y de las informaciones que tenemos a mano, se desprende que si el contrato no es adjudicado en breve plazo, el costo de los materiales resultará aun mayor.

En vista de la anterior exposición, nos permitimos de la manera más respetuosa, suplicar a ustedes nos manifiesten, tan pronto como sea posible, si la decisión para adjudicar el contrato ha de ser dictada dentro de pocos días, para guiarnos de acuerdo con la estimable contestación de ustedes”.

Fuera de eso, con respecto a la licitación ya hecha de las obras y de la provisión de gasolina, la Secretaría sabe únicamente que en La Gaceta de 6, 9, 10 y 11 de febrero de este año fue publicada con plazo al 20 de marzo siguiente, y que en La Gaceta del 10 y 11 de febrero aparece un aviso ampliando el término al 31 de marzo; pero no tiene noticia de que la licitación fuera publicada “en otros dos diarios de la capital” como lo dispuso el Congreso en el referido artículo 3º de la ley que creó el monopolio.

Si el Poder Ejecutivo ha creído que debe hacerse nuevamente la licitación de la planta e instalaciones, de la compra de estañones y de la provisión de gasolina, es porque sin estar reglamentada la ley no ha podido hacerse la licitación, porque ésta fue publicada únicamente en La Gaceta, contraviniendo así el mandato del Congreso y porque ha tenido la noticia de que hay una empresa productora de gasolina que se ha dirigido al Banco proponiéndole erigir en Puntarenas una instalación completa con capacidad para 15000 barriles y la provisión de gasolina por un año, esta última a diez centavos oro americano el galón, puesta en el tanque, con obligación la empresa de hacer de su cuenta todos los gastos hasta entregar la gasolina envasada en los estañones del Banco; el manejo, lo tendrá por un año, al cabo del cual se le pagarán \$ 25,000.00 oro americano como precio de toda la obra. Si continuara el manejo por más tiempo, al final de cada año posterior, el precio, para que toda la instalación pasara a poder del Banco y continuara éste explotándola, se rebajaría en un 20 %, de modo que al completarse seis años toda la instalación pasaría a poder del Estado sin desembolso alguno. Una nueva licitación, pues, no sólo es de rigor para que se llenen en ella las exigencias de la ley, sino que sería de suma conveniencia para el país, puesto que es probable que fueran hechas propuestas más ventajosas que las presentadas en la anterior.

La segunda objeción del Banco es la siguiente:

“II.—En cuanto al artículo 2º: El artículo 21 de la ley orgánica del Banco Nacional de Seguros, Nº 12 de 30 de octubre de 1924, en su inciso 5º, prohíbe a este Establecimiento, “emprestar dinero al Gobierno, Municipios, Juntas de Educación o de Caridad, si no es con garantías reales que puedan hacerse efectivas en caso de incumplimiento de la obligación”; y el artículo 15 ibídem dice: “Todo acto o resolución que contravenga las disposiciones de esta ley o de los reglamentos vigentes, sujeta a los miembros de la Directiva que estén presentes, a reponsabilidad personal y solidaria”. No cree entonces esta Junta que por virtud de un reglamento de la Secretaría de Hacienda pueda el Banco prestar al Gobierno, en condiciones que el mismo reglamento señala, una suma que ni siquiera se limita. Un préstamo al Gobierno puede el Banco hacerlo, ciñéndose a sus normas obligatorias; pero el monto, las condiciones y garantías del préstamo tienen que ser convenientes entre las partes. Un reglamento es un acto unilateral; el Estado, para tomar dinero en arrendamiento, es sólo una parte, y no puede, por lo tanto, obtener tal empréstito por una disposición suya no aceptada aun por el probable prestamista. Por lo dicho, el Banco Nacional de Seguros no podría, sin infringir las leyes y reglamentos que lo disciplinan, prestar dinero al Gobierno, ni a nadie, sino en fuerza de un contrato aprobado por su Junta de Gobierno”.

La ley que creó el monopolio de la gasolina no dice expresamente que el Banco suplirá al Gobierno los fondos necesarios para su instalación y manejo, pero lo natural es deducir, como lo ha hecho el Poder Ejecutivo, que si se le encomendó al Banco la administración del negocio fue con la mira de que esa Institución del Estado lo financiara, y si ello es así, es obvio que la dicha ley modificó para este caso especial la de fundación del Banco en lo relativo a garantías reales que tuviera que darle el Gobierno en las operaciones de préstamo que se concertaran entre ambos. Obsérvese que el Poder Ejecutivo no ha sido el que encomendó al Banco la administración del negocio y que tampoco le ha solicitado dinero para ese objeto, sino que fue una ley de la República la que puso el asunto en manos del Banco y resultará más patente que nada tiene que hacer en el caso la exigencia de las garantías reales. Pero de todos modos la objeción del Banco carece de razón. Sin tomar en cuenta otros valores, el Banco tiene del Gobierno y la usa en su exclusivo beneficio, una suma que pasa de dos millones y medio de colones, cuya devolución puede exigírsele en cualquier momento. ¿Qué mejor garantía real podría desear el Banco que dinero efectivo en su poder por una cantidad más de seis veces mayor que la que

supliría al Gobierno, conforme a los propios cálculos del Banco? Es verdad que, como queda dicho, el Gobierno puede exigir en cualquier momento al Banco la devolución de aquella cuantiosa suma; pero es claro que en tal ocurrencia, con reservarse el monto de los suplementos que hubiere hecho conservaría la garantía real, por cierto la mejor, en la relación de un ciento por ciento.

La tercera objeción se refiere al artículo 10 del reglamento, que dice "Todo plan de operación del negocio deberá ser aprobado por la Secretaría de Hacienda". Entiende el Banco que está implicado en la administración del monopolio, y por eso en cuanto a esa disposición, se remite a lo que deja manifestado cuando considera el artículo primero del proyecto.

Según el propio Banco, las razones son las mismas aducidas en contra del artículo 1º y, por consiguiente, no hay que agregar nada especial.

En los cuadros que a esta Secretaría envió el Banco, relativos a los gastos y demás erogaciones del negocio y al rendimiento del mismo sobre las sumas que suplirá para la instalación de la planta y accesorios, renovación de estañones y capital de trabajo, carga al negocio un 10 % anual de interés: fija en diez años, siete años y en cuatro meses los plazos de amortización de esas inversiones; señala para el Banco una comisión de 6 % sobre el producto de las ventas, y entre las primas de seguro incluye la del de fidelidad de los empleados. En el capital de trabajo comprende los derechos de aduana, y en el artículo 5º del proyecto de reglamento que envió a este Despacho, se establece, que esos derechos los pagará mensualmente con relación "a las ventas habidas durante el mes que se liquida". Es evidente que el Banco computa intereses sobre una suma que no ha desembolsado, y evidente asimismo que incluye en la amortización violentísima de ese capital de trabajo esa cantidad no desembolsada.

El interés de 10 % es muy elevado y ninguna de las demás colocaciones que de sus fondos tiene hechas el Banco alcanza a ese tipo, sino que el promedio es apenas de la mitad, como lo expresa en uno de sus votos salvados el señor Vicepresidente del Banco doctor don Carlos Pupo. Esos votos están agregados en la documentación que se acompaña.

Las amortizaciones son muy rápidas y solamente la de ciento treinta mil colones (¢ 130,000.00) por mes del capital de trabajo en cada uno de los tres primeros meses, consumiría en ese término el producto de la venta mensual que estima en ciento cincuenta mil colones (¢ 150,000.00) y dejaría solamente veinte mil mensuales (¢ 20,000.00) para todos los intereses, gastos, comisión y resto de amortizaciones que alcanzan a una suma mucho mayor.

El Poder Ejecutivo piensa que aún procediendo con largueza, no puede fijarse más de un seis por ciento anual de interés, que es el tipo que cobra el Banco Internacional de Costa Rica a los particulares a quienes ha prestado dinero para siembras de café; que el plazo de amortización no puede ser menor en cuanto a todas las inversiones iniciales, de veinte años que es el plazo que concede a sus clientes para el mismo fin el Crédito Hipotecario de Costa Rica; y que la prima del seguro de fidelidad no hay motivo para que la pague el Gobierno ya que es el Banco quien nombra los empleados y debe, por lo tanto, responder de la honorabilidad de los mismos.

Por lo que respecta a la comisión, como la ley del Congreso no asigna ninguna al Banco, el Poder Ejecutivo ha interpretado que la mente de la Cámara no fue la de que el servicio de administración encomendada al Banco fuera retribuido, y para ello ha tenido en cuenta los siguientes antecedentes relacionados con otro organismo bancario del Estado: el Banco Internacional de Costa Rica.

La ley creadora de la Caja de Conversión impuso el manejo de ella al Internacional y lejos de fijarle comisión, estableció a cargo de este establecimiento la obligación de cubrir los gastos que tal sección ocasionara en el tanto que resultaran

insuficientes las muy modestas utilidades de la Caja, y le impuso una carga aun más onerosa, la de sanear con los propios fondos de la Institución, las pérdidas que hubiera por las letras de cambio que resultarían incobrables. La ley que estableció la Junta de Control de Cambios le dio al Internacional el nombramiento de los miembros de ella, y no por ese motivo le dio al Banco ningún privilegio ni preferencia sobre los demás en el comercio de letras y antes bien lo obligó al pago de los gastos de instalación y mantenimiento de dicha Junta.

Con las propias cifras del Banco Nacional de Seguros consignadas en los dichos cuadros que forman parte de la documentación acompañada, pueden hacerse los cálculos del porcentaje de gastos y del provecho que derivaría el Banco si se aceptaran, el proyecto de contrato y el de reglamento que sometió a esta Secretaría y se llegará a la conclusión de que para obtener en cuatro meses con un volumen de ventas de ₡ 657,883.33, una utilidad neta de ₡ 177,516.93, el Banco percibiría por intereses, primas de seguro y comisión, la suma de ₡ 56,673.40 en ese período de cuatro meses, lo que vendría a significar una merma del 31,93 % de la ganancia.

Hecho con las mismas cifras del Banco el cálculo de la utilidad neta al año con el monopolio, resultaría que la utilidad al año de ₡ 532,550.79, sumada a los derechos de aduana según el Banco sobre la introducción de gasolina a granel o sean

	₡ 580000 00
da una entrada total de	₡ 1112550 79
y como por derechos de aduana por la introducción de gasolina en estañones y cajas se perciben ahora unos	700000 00
la utilidad neta anual del monopolio vendría a ser solamente de	₡ 412550 79

después de cubierta la merma en los derechos de aduana que sería de ₡ 120,000.00 de la diferencia entre los ₡ 580,000.00 y ₡ 700,000.00 expresados.

La urgencia de enviaros ya esta exposición por ser la de esta tarde vuestra última sesión del período ordinario me obliga a dejar para otra ocasión, si así lo deseáis, mayores explicaciones sobre el particular, y sólo me resta expresaros que el Poder Ejecutivo, en vista de la inconformidad del Banco Nacional de Seguros con el reglamento que se dictó, ha considerado del caso enviaros los antecedentes del asunto y la presente exposición a fin de que os sirváis lo que estiméis conveniente, sea en el sentido de que se mantenga la disposición ejecutiva reglamentaria, sea en el de que sea modificada en la forma que el Banco lo desea ahora o en la de sus proyectos de contrato o reglamento o sea en cualquier otro que tengáis a bien, ya que vuestra decisión será debidamente acatada por él.

C. C.

CARLOS BRENES
Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 13 de agosto de 1932.

Nº 32

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

Las partidas asignadas en el Presupuesto vigente para alimentación de tropa del Cuartel Buena Vista y de los miembros de las guarniciones y reos de las cárceles y presidios, así como para atender los gastos de la Caballeriza Nacional, dependencias todas de la Secretaría de Seguridad Pública, están al agotarse y urge

proveer los fondos necesarios a fin de cumplir los contratos pendientes para atender tales servicios.

No es fácil hacer con alguna exactitud el cálculo de lo que puede gastarse en alimentación, debido a que por circunstancias de diversa índole, el número del personal de las guarniciones y el de reclusos en aquellos centros penales, es muy variable y no permite dar con firmeza el monto de lo que por ese concepto haya de gastarse; y bien por ese motivo, bien por imprevisión al conocer de esas partidas en la discusión de la ley respectiva, es lo cierto que las sumas presupuestas han resultado insuficientes, y promediando las cantidades erogadas hasta hoy, piensa esta Secretaría que para lo que resta del presente ejercicio económico, podrían consumirse ₡ 13,000.00 más en alimentos de la tropa del mencionado Cuartel, seis mil colones en los servicios de la Caballeriza Nacional, y setenta y ocho mil quinientos colones en alimentación de las guarniciones y reos de las cárceles y presidios.

Asimismo diversas atenciones diplomáticas han exigido una mayor erogación en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuya partida asignada en el renglón de "Eventuales", cuenta en la actualidad con un saldo de setenta colones, y apenas con unos tres mil colones más podría atender los gastos de esa clase en el resto de este año.

Por los motivos expuestos, siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, muy respetuosamente someto a vuestras deliberaciones el siguiente proyecto de ley:

El Congreso etc.

Decreta:

Artículo único.—Ampliarse en las sumas que a continuación se expresan, los siguientes renglones del presupuesto del presente año:

Secretaría de Relaciones Exteriores

Partida 4.—Eventuales ₡ 3000 00

Secretaría de Seguridad Pública

Partida 5.—Cuartel Buena Vista
Alimentación de tropa, según contrato 13000 00

Departamento de Policía Militar

Partida 20.—Gastos Diversos
Caballeriza Nacional, según contrato 6000 00

Departamento de cárceles y presidios

Partida 42.—Alimentación de reos y guarniciones, cárceles y presidios, según contratos 78500 00

El presente decreto rige desde su publicación.

C. C.

CARLOS BRENES
Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 26 de agosto de 1932.

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

Con fecha quince de los corrientes, la Oficina de Control se dirigió a la Secretaría de Estado en el Despacho de Fomento y Agricultura, haciéndole ver que en los renglones "Alumbrado Oficial, teléfonos y fuerza eléctrica" de la partida "Diversos" de aquel Despacho, la asignación legislativa ha resultado exigua, de tal manera que, ciñéndose al cupo mensual, solamente ha podido autorizar un gasto de seis mil doscientos cincuenta colones por alumbrado y fuerza eléctricos y doscientos noventa y un colones, sesenta y seis céntimos por servicio telefónico, cantidades harto insuficientes según lo anota la propia oficina, para cubrir el efectivo gasto mensual a cargo de cada uno de esos renglones. Aquel mismo Centro Contralor reconoce la necesidad urgente de una ampliación de presupuesto aproximada de cuarenta y dos mil colones (₡ 42,000.00) para Alumbrado Oficial, y seis mil ochocientos colones (₡ 6,800.00) para teléfonos y fuerza eléctrica, a fin de cancelar el déficit y proporcionar a los acreedores la oportunidad de que puedan cobrar sus giros.

Las razones expuestas me mueven, siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, a solicitar el necesario crédito por medio del siguiente proyecto que muy respetuosamente someto a la consideración de esa Honorable Cámara Legislativa:

El Congreso etc.

Decreta:

Artículo único.—Amplíense los renglones cuarto y quinto de la partida 11 del presupuesto de la Secretaría de Fomento y Agricultura así:

Alumbrado Oficial

En cuarenta y dos mil colones	₡ 42000 00
---	------------

Teléfonos y fuerza eléctrica

En seis mil ochocientos colones	6800 00
---	---------

C. C.

CARLOS BRENES
 Secretario de Estado en el
 Despacho de Hacienda y Comercio

San José, 27 de setiembre de 1932.

CONGRESO CONSTITUCIONAL:

En oficio de trece de los corrientes, el señor Subsecretario de Educación Pública expone la necesidad de ampliar en ocho mil colones los "Eventuales" que para aquella Secretaría autoriza el Presupuesto vigente, pues la partida respectiva reultará sobregirada si tomamos en cuenta las cuentas a pagar y el cupo mensual disponible. Por otra parte varios cargos que corresponden a esa misma partida, han sido provisionalmente hechos a la "Sección de Compras", en conformidad con las prescripciones del artículo 18 de aquella ley, pero es de urgencia aportar los recursos para reintegrar tales sumas, a fin de no alterar la cifra que haya de señalarse para aquel renglón en mil novecientos treinta y tres, cubriendo saldos por erogaciones del presente ejercicio económico.

Asimismo y a efecto de dar cumplimiento al contrato Nº 2, fecha nueve del presente mes, celebrado por aquel Despacho con el señor Justino Vallejo Bes-